



JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTES: TECDMX-JLDC-
005/2023, TECDMX-JLDC-006/2023
Y TECDMX-JLDC-007/2023
ACUMULADOS

PARTES **ACTORAS:**
[REDACTED] Y OTRAS
PERSONAS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
SECRETARÍA EJECUTIVA,
CONSEJO GENERAL Y ÓRGANO
DESCONCENTRADO 28, TODOS
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA **PONENTE:**
MARTHA LETICIA MERCADO
RAMÍREZ

SECRETARIADO: ADRIANA ADAM
PERAGALLO Y ALFONSO
MARTÍNEZ LÓPEZ

**Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil
veintitrés.**

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en sesión
pública de esta fecha, resuelve:

a) Sobreseer las demandas por lo que hace a la impugnación
del “*Documento rector para la obtención del Marco Geográfico
de Participación Ciudadana 2022, emitido por el Instituto
Electoral de la Ciudad de México*”;

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

b) Confirmar los oficios **IECM/SE/60/2023** y **IECM/SE/62/2023** emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México;

c) Confirmar el oficio **IECM/DD/28/011/2023** dictado por el Órgano Desconcentrado 28 del Instituto Electoral de la Ciudad de México; y,

d) Confirmar los **Acuerdos IECM/ACU-CG-007/2023** y **IECM/ACU-CG-011/2023** emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

ÍNDICE

GLOSARIO3

ANTECEDENTES5

CONSIDERACIONES.....15

PRIMERA. Competencia.15

SEGUNDA. Perspectiva intercultural16

TERCERA. Acumulación.22

CUARTA. Causales de improcedencia.27

QUINTA. Requisitos de procedencia.32

SEXTA. Agravios y litis a resolver.....38

I. Agravios38

II. Litis40

SÉPTIMA. Estudio de fondo.....41

1. Derecho de petición41

2. El derecho al reconocimiento de las comunidades indígenas44

3. Registro de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.....48

4. Elaboración del *Marco Geográfico*.....50

5. Sentencias sobre el tema52



TECDMX-JLDC-005/2023
Y ACUMULADOS

a. Sentencia del asunto TECDMX-JLDC-29/2020 y acumulados 52

b. Sentencia de los asuntos SCM-JDC-150/2021 y acumulados 54

c. Sentencia del asunto TECMDX-JLDC-141/2022 y acumulados 55

d. Sentencia de los asuntos SCM-JDC-388/2022 y acumulados 57

6. Caso concreto 61

a. Reconocimiento por parte del Instituto 63

b. Autoadscripción 67

c. Vulneración al principio de progresividad 70

d. Oportunidad e interculturalidad de las respuestas del Secretario Ejecutivo 77

RESUELVE: 85

GLOSARIO

Actores, partes actoras, promoventes o demandantes	Expediente TECDMX-JLDC-005/2023: [Redacted] y [Redacted], quienes se autoadscriben, respectivamente, a: San Pedro Xalpa; San José Tula, Los Reyes Culhuacán, Estrella Culhuacán, San Simón Culhuacán, Tonatlán, Santa María Tomatlán, Barrio San Antonio Culhuacán, 8 Barrios Iztapalapa y San Andrés Tomatlán
	Expediente TECDMX-JLDC-006/2023: [Redacted], quien se autoadscribe al barrio Estrella Culhuacán.
	Expediente Juicio TCDMX-JLDC-007/2023: [Redacted] y [Redacted], quienes se autoadscriben a San Pedro Xalpa; San Juan Tlilhuoca y San Bartolito Cahualtongo.
Acuerdo 007/2023 o Convocatoria de participación ciudadana	Acuerdo IECM/ACU-CG-007/2023 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024
Acuerdo 011/2023 o Convocatoria de Presupuesto Participativo 2023 y 2024 para	Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la Convocatoria a las personas ciudadanas, habitantes, vecinas, así como a las Autoridades

TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS

<i>Pueblos</i>	Tradicionalistas representativas de los 50 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente, elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que, de común acuerdo, en un solo acto o evento de deliberación y decisión con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas y procedimientos, en cada pueblo originario se determine el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, actividades recreativas, deportivas o culturales y en general cualquier mejora para la comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para los ejercicios fiscales 2023 y 2024.
<i>Código Electoral</i>	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Constitución Federal</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Constitución Local</i>	Constitución Política de la Ciudad de México
<i>Convocatoria o Convocatoria de la SEPI</i>	Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.
<i>Documento rector</i>	Documento Rector para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022, emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Instituto Electoral o IECM</i>	Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Ley de Participación</i>	Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
<i>Ley Procesal</i>	Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
<i>Ley de Pueblos</i>	Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México
<i>Lugares de autoadscripción</i>	<p>Expediente TECDMX-JLDC-005/2023: San Pedro Xalpa, San José Tula, Los Reyes Culhuacán, Estrella Culhuacán, San Simón Culhuacán, Tonatlán, Santa María Tomatlán, San Antonio Culhuacán, 8 Barrios Iztapalapa, San Andrés Tomatlán.</p> <p>Expediente TECDMX-JLDC-006/2023: Estrella Culhuacán</p> <p>Expediente TECDMX-JLDC-007/2023: San Pedro Xalpa, San Juan Tlilhuoca y San Bartolito Cahualtongo</p>
<i>Marco geográfico</i>	Marco Geográfico de Participación Ciudadana
<i>Oficios impugnados</i>	<p>Expediente TECDMX-JLDC-005/2023: Oficio IECM/SE/60/2023 emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México</p> <p>Expediente TECDMX-JLDC-006/2023: Oficio IECM/SE/62/2023 emitido por el Secretario</p>



	Ejecutivo, así como el oficio IECM/DD/28/011/2023 del Órgano Desconcentrado 28, ambos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Sala Regional</i>	Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Secretaría de Pueblos o SEPI</i>	Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México.
<i>Secretario Ejecutivo</i>	Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Suprema Corte o SCJN</i>	Suprema Corte de Justicia de la Nación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral de la Ciudad de México

ANTECEDENTES

De las demandas, de los autos que integran el expediente al rubro indicado y de los hechos notorios invocados conforme al artículo 52 de la *Ley Procesal*, se advierte lo siguiente:

I. Actuaciones del *Instituto Electoral*

a. Aprobación del *Documento rector*. El cuatro de marzo de dos mil veintidós¹, el *Consejo General* aprobó el *Documento rector* para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022, que se utilizará para la elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta sobre Presupuesto Participativo para los años 2023 y 2024.

b. Emisión de convocatoria por la *Secretaría de Pueblos*. El treinta de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la *Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y*

¹ En adelante, las fechas se referirán al año dos mil veintidós, salvo que se realice otra precisión.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Documentación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

c. Aprobación del Marco Geográfico (acuerdo IECM/ACU-CG-066/2022). El veintiocho de octubre, el Consejo General aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022, en que se reconocieron mil ochocientas treinta y siete (1,837) unidades territoriales y cuarenta y ocho (48) pueblos originarios.

d. Acuerdo IECM/ACU-CG-007/2023. El quince de enero de dos mil veintitrés, el *Consejo General del Instituto Electoral*, aprobó la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

e. Acuerdo IECM/ACU-CG-011/2023. En esa misma fecha el *Consejo General del IECM* emitió el acuerdo por el cual se aprobó *la Convocatoria de Presupuesto Participativo 2023 y 2024 para Pueblos*.

II. Actos que motivaron los oficios impugnados

A. Juicio TECDMX-JLDC-005/2023

a. Sentencia de este *Tribunal Electoral*. El veintidós de noviembre, este *Tribunal Electoral* emitió sentencia en el diverso juicio de la ciudadanía **TECDMX-JLDC-024/2022**, en la cual, entre otras cuestiones, ordenó al Secretario Ejecutivo del *IECM*



emitir una nueva respuesta respecto al reconocimiento de los lugares de autoadscripción como pueblos y barrios originarios que impugnaron aquel asunto [representados por el Frente por la defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac], lo cual debía acontecer a más tardar el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

b. Requerimiento del IECM. El treinta de noviembre, mediante el oficio **IECM/SE/588/2022**, el *Instituto Electoral* requirió al Frente por la defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac, a efecto de que presentara información y documentación respecto a las comunidades que integraban el mismo.

En particular, se requirió informaran el vínculo de cada una de las personas peticionarias con los pueblos y/o barrios a los que se autoadscribían, es decir, si tenían el carácter autoridades representativas o tradicionales de sus respectivas comunidades, señalaran las unidades territoriales del Marco Geográfico que, en su caso, integraban sus comunidades y datos de identificación y localización de las personas peticionarias.

Lo anterior, a efecto de allegarse de elementos para emitir la respuesta que este *Tribunal Electoral* le ordenó en la sentencia antes referida.

c. Petición de Prórroga. Mediante escrito de cinco de diciembre, algunas partes actoras del juicio de la ciudadanía **TECDMX-**

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

JLDC-024/2022 solicitaron al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral una **prórroga** de cinco días, con la finalidad de recabar y remitir la documentación solicitada.

Asimismo, solicitaron al Secretario Ejecutivo se propusiera una fecha y hora para tener un reunión de trabajo con las personas peticionarias a efecto de conocer la cartografía y determinar qué unidades territoriales correspondían a sus lugares de autoadscripción.

d. Respuesta de la Secretaría Ejecutiva (*oficio impugnado*). El diez de enero del año en curso, mediante el oficio **IECM/SE/60/2023**² el *Secretario Ejecutivo* dio respuesta a la solicitud realizada por las personas peticionarias en los siguientes términos:

- La *SEPI* es la autoridad competente para otorgar el reconocimiento de la condición de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México y una vez que ello ocurra, dicha *Secretaría de Pueblos* deberá comunicarlo al *IECM* a efecto de modificar el Marco Geográfico de Participación Ciudadana.
- El requerimiento de información formulado mediante el oficio **IECM/SE/588/2022** se realizó a fin de dar cumplimiento a la sentencia **TECDMX-JLDC-024/2022**, con la finalidad de conocer información relacionada con la comunidad de San

² Notificado el trece de enero del año en curso, según se observa del acuse de recibo del oficio en comento, mismo que obran en autos a fojas 33 a 42 del expediente TECDMX-JLDC-005/2023.



Andrés Tomatlán y estar en posibilidad de dar una respuesta debidamente fundada y motivada a más tardar el dieciséis de diciembre, plazo perentorio para cumplir con la ejecutoria referida.

- El dieciséis de diciembre, se emitió el diverso oficio **IECM/SE/744/2022** por el que se emitió una nueva respuesta al “Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la cuenca del Anáhuac”.
- Respecto a la prórroga solicitada para entregar la información requerida, no resultaba procedente toda vez que dicha información se requería para emitir la nueva respuesta ordenada por el Tribunal Electoral en la sentencia **TECDMX-JLDC-024/2022**, la cual debía realizarse a más tardar el dieciséis de diciembre, por lo cual no resultaba procedente la ampliación solicitada.
- Por lo que hace a la reunión de trabajo para conocer la cartografía, se precisó que dicho material es de consulta pública y se encuentra disponible en la página institucional del *IECM*, para lo cual en el oficio se puso a disposición la liga electrónica en la cual podía ser consultada la información en comento.
- Finalmente, se precisó que si de la revisión de los datos proporcionados, aún considera necesaria una reunión, esta podrá programarse poniéndose en contacto con la Dirección

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del
Instituto Electoral.

-Juicio TECDMX-JLDC-006/2023

a. Petición al Órgano Desconcentrado 28 del *IECM*. Mediante escrito de catorce de octubre de dos mil veintidós, una de las partes actoras del juicio en comento —[REDACTED]—, solicitó al Órgano Desconcentrado 28 del *IECM*, que: “*en el proceso de circunscripciones...el Barrio originario Estrella Culhuacán sea ingresado a la cartografía*”, ya que se contaba con los elementos para demostrar que “*se trata de un barrio originario*”.

b. Petición al Secretario Ejecutivo del *IECM*. Mediante escrito de catorce de diciembre, presentado ante el *IECM* el diecinueve siguiente, algunas partes actoras del juicio de la ciudadanía **TECDMX-JLDC-024/2022** —entre ellas [REDACTED]— solicitaron al Secretario Ejecutivo del *Instituto Electoral*, entre otras cuestiones, que no se condicionara el reconocimiento de sus lugares de autoadscripción como pueblos y barrios originarios hasta que lo determinara la *SEPI* en su sistema de registro.

Asimismo, nuevamente solicitaron que se propusiera una fecha y hora para tener una reunión de trabajo con las personas peticionarias a efecto de conocer la cartografía y determinar qué



unidades territoriales correspondían a sus lugares de autoadscripción.

c. Respuesta Órgano Desconcentrado 28 (oficio impugnado). El diez de enero de la presente anualidad, mediante el oficio **IECM/DD28/011/2023**³, la Titular del Órgano Desconcentrado 28 del *Instituto Electoral*, dio respuesta a la solicitud formulada, manifestando, en esencia, lo siguiente.

- La *SEPI* no ha remitido información del registro de los pueblos y barrios originarios, por lo que se está a la espera de que se envíe la información respectiva para que, de ser el caso, se realicen los ajustes al estatus de la unidad territorial Estrella Culhuacán, para darle el tratamiento como barrio/pueblo originario en el Marco Geográfico de participación ciudadana a utilizarse en la consulta de presupuesto participativo 2023 y 2024.
- Que de la revisión a los archivos que obran en las distintas áreas del Instituto Electoral, no se desprende información que reconozca el carácter de barrio originario a Estrella Culhuacán en Iztapalapa.
- Que el reconocimiento y registro al Sistema de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de

³ Notificado el trece de enero del año en curso, según se observa del acuse de recibo del oficio en comento, mismo que obran en autos a fojas 50 a 53 del expediente TECDMX-JLDC-006/2023.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

la Ciudad de México es una atribución que corresponde a *SEPI*.

d. Respuesta de la Secretaría Ejecutiva (*oficio impugnado*). El diez de enero del año en curso, mediante el oficio **IECM/SE/62/2023**⁴ el *Secretario Ejecutivo* dio respuesta a la solicitud realizada por en los siguientes términos:

- La *SEPI* es la autoridad competente para otorgar el reconocimiento de la condición de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México.
- Por lo que hace a la reunión de trabajo para conocer la cartografía, se precisó que dicho material es de consulta pública y se encuentra disponible en la página institucional del *IECM*, para lo cual en el oficio se puso a disposición la liga electrónica en la cual podía ser consultada la información en comento.
- Finalmente, se precisó que si de la revisión de los datos proporcionados, aún considera necesaria una reunión, esta podrá programarse poniéndose en contacto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del *Instituto Electoral*.

III. Tramitación de los juicios de la ciudadanía

⁴ Notificado el diecisiete de enero del año en curso, según se observa del acuse de recibo del oficio en comento, mismo que obran en autos a fojas 33 a 41 del expediente TECDMX-JLDC-006/2023.



a. Demandas. El diecinueve de enero de la presente anualidad, las partes actoras presentaron, vía correo electrónico ante este Tribunal, las demandas de juicios de la ciudadanía mediante las cuales controvierten, los **oficios impugnados**, los **Acuerdos IECM/ACU-CG-007/2023** y **IECM/ACU-CG-011/2023**, así como el **Documento rector**.

Lo anterior, en síntesis, por la negativa de reconocer a los *lugares de autoadscripción* de las *partes actora* como pueblos o barrios originarios para participar en el proceso de participación ciudadana en curso.

b. Turno. En veinte de enero siguiente, el Magistrado en funciones de Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó formar los expedientes **TECDMX-JLDC-005/2023**, **TECDMX-JLDC-006/2023** y **TECDMX-JLDC-007/2023**, respectivamente; y turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez.

c. Trámite de ley. En su oportunidad el Secretario Técnico en Funciones de Secretario General de este *Tribunal Electoral* remitió al *Instituto Electoral* copia autorizada de los escritos de las demandas, para los efectos previstos en los artículos 77 y 78 de la *Ley Procesal*, esto es, realizar la publicación de la ley y rendir los informes circunstanciados respectivos.

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

El treinta de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió los informes circunstanciados, las constancias relativas a la publicitación de las demandas, y demás constancias correspondientes a cada expediente.

d. Radicación. El veinticuatro de enero siguiente, la Magistrada Instructora radicó en su ponencia cada uno de los juicios al rubro citados.

e. Escisiones. Mediante acuerdos plenarios de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés el Pleno de este Tribunal determinó escindir las demandas respecto a la parte en la que se controversió la *Convocatoria de la SEPI* —lo que incluye la supuesta nulidad del sistema de registro— por considerar que ello no corresponde a la materia electoral, por lo que se dio vista al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

f. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad la Magistrada Instructora admitió los juicios y ordenó el cierre de instrucción.

g. Sesión Pública. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la sesión pública en la que fue rechazado el proyecto de resolución del presente asunto, ordenándose que se realizara el autoengrose correspondiente por parte de la ponencia de la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, mismo que fue aprobado por mayoría de votos de los integrantes del Pleno.



CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia.

El Pleno del *Tribunal Electoral* es competente para conocer y resolver los juicios presentados contra actos o resoluciones de una autoridad que vulneren cualquiera de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el ámbito local de la Ciudad de México.

En este caso, se actualiza la competencia de este Tribunal, porque los actos impugnados en los presentes juicios están vinculados con el reconocimiento de diversas unidades territoriales como pueblos o barrios originarios para participar en el proceso de participación ciudadana en curso, lo cual podría afectar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas integrantes de tales comunidades.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c) y l), numeral 5º y 122, apartado A, bases VII y IX de la *Constitución Federal*; 38 y 46, apartado A, de la *Constitución Local*; 30, 165, párrafo segundo, fracciones II y V, 171, 178 y 179, fracciones II y VIII del *Código Electoral*; así como 123, fracción V, de la *Ley Procesal*.

Precisando que, mediante acuerdos plenarios de treinta de enero del año en curso, este Tribunal determinó escindir las demandas en la parte relativa a la impugnación de la *Convocatoria de la SEPI*, por considerar que ello no corresponde a la materia electoral, por lo cual no se asume competencia respecto a esa parte de la controversia.

SEGUNDA. Perspectiva intercultural.

Como cuestión previa, a fin de resolver la materia de controversia de los juicios al rubro indicados, y en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva —previsto en el artículo 17 de la *Constitución Federal*—, este órgano jurisdiccional estima pertinente realizar algunas precisiones con relación a la perspectiva con que deben analizarse los juicios.

El artículo 2 de la *Constitución Federal*, dispone que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

El apartado A del mismo artículo constitucional establece que se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para:

- a)** Decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.

- b)** Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Por su parte, el artículo 2, párrafo 2, inciso b) del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que los gobiernos deben promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

El artículo 8 del mismo ordenamiento prevé que dichos pueblos tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, y que al aplicar la legislación nacional deben tomarse en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario.

A su vez, el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas⁵ regula que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, por virtud de la cual pueden decidir libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.

El artículo 4 de dicha Declaración establece que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,

⁵ Instrumento que expresa un amplio consenso de la comunidad internacional y sirve de parámetro orientador para definir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos tanto en el derecho constitucional como internacional.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

El artículo 5 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.

Así, del contenido de las normas invocadas se advierte que las comunidades indígenas tienen el derecho a elegir a sus autoridades y órganos representativos de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales.

Sobre este tema, la *Suprema Corte* ha señalado en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas⁶, que los pueblos y comunidades indígenas tienen la capacidad de definir sus propias instituciones de gobierno, las cuales no necesariamente tienen que corresponder estrictamente con el resto de las instituciones del Estado.

Este aspecto guarda relación con el derecho de los indígenas de mantener y reforzar sus sistemas normativos, pues precisamente la elección de sus autoridades y representantes, así como el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno y definición de los asuntos que les afectan se realiza en el marco establecido

⁶ Consultable a través del link: <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion>.



por el Derecho Indígena aplicable; el cual constituye parte del orden jurídico del Estado Mexicano.

Al respecto, la *Sala Superior*, razonó en la jurisprudencia **19/2014**, de rubro “**COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO**”⁷, que el derecho de autogobierno como manifestación concreta de la autonomía comprende:

- a. El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos humanos de sus integrantes.
- b. El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales.
- c. La participación plena en la vida política del Estado; y,
- d. La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses.

⁷ Consultable en: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2014&tpoBusqueda=S&sWord=19/2014>

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

Asimismo, en la jurisprudencia **37/2016** de rubro **“COMUNIDADES INDÍGENAS. EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO”**⁸, la *Sala Superior* ha establecido que, en el marco de aplicación de los derechos individuales y colectivos indígenas, los órganos jurisdiccionales deben privilegiar el principio de maximización de la autonomía, salvaguardando y protegiendo el sistema normativo interno que rige a cada pueblo o comunidad.

Por otro lado, la Primera Sala de la *Suprema Corte* ha establecido que, para garantizar el acceso a la jurisdicción de las personas indígenas, se debe hacer una interpretación intercultural, es decir, un análisis culturalmente sensible; el cual se logra al considerar el contexto en que se desarrollan las comunidades indígenas y sus particularidades culturales al momento de interpretar y definir el contenido de sus derechos, a partir de un diálogo intercultural.

Esto puede consultarse en la tesis **1a. CCXCIX/2018 (10a.)** de rubro **“INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL. ALCANCE DE LAS PROTECCIONES DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL.”**⁹.

⁸ Consultable a través del siguiente enlace: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2016&tpoBusqueda=S&sWord=37/2016>

⁹ Consultable a través del link: <https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx>.

Cabe indicar que de acuerdo con la tesis 1a. CCXI/2009 de rubro **“PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. EN LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE QUE SEAN PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR EN CUENTA TANTO LAS NORMAS DE FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES.”**¹⁰, la Primera Sala de la SCJN ha señalado que los órganos jurisdiccionales están obligados a indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad, ya que influyen en los hechos sometidos al conocimiento de los jueces y tribunales.

De manera similar, la *Sala Superior* estableció que para garantizar el acceso a la justicia con una perspectiva intercultural es necesario, entre otras cuestiones, lo siguiente:

1. Obtener información de la comunidad a partir de fuentes adecuadas que permitan conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena; como pueden ser solicitudes de peritajes, dictámenes etnográficos u opiniones especializadas, así como informes y comparecencia de las autoridades tradicionales.
2. Identificar el Derecho Indígena, esto es, sus normas, principios, instituciones y características propias de los

¹⁰ Consultable a través del link: <https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx>.

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

pueblos y comunidades que no necesariamente corresponden al Derecho legislado.

Lo anterior fue sostenido por la referida *Sala Superior* en la jurisprudencia **19/2018**, de rubro **“JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.”**¹¹.

TERCERA. Acumulación.

El artículo 82 de la *Ley Procesal* establece que el Pleno de este Tribunal puede ordenar la acumulación de los juicios para su resolución pronta y expedita.

Por su parte, el artículo 83, fracción I de la citada Ley establece que procede la acumulación cuando se impugnen los mismos actos por diversas partes actoras. En tanto que la fracción III del citado precepto establece que se podrá acumular en aquellos casos en que existan elementos que así lo justifiquen.

En atención a ello, este Tribunal determina que deben acumularse al juicio **TECDMX-JLDC-005/2023**, los expedientes **TECDMX-JLDC-006/2023** y **TECDMX-JLDC-007/2023**.

Lo anterior, toda vez que, de la lectura integral de las demandas, se puede advertir que en las tres demandas se impugnan los

¹¹ Consultable a través del link: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2018&tpoBusqueda=S&sWord=19/2018>

misimos **Acuerdos IECM/ACU-CG-007/2023 y IECM/ACU-CG-011/2023**, así como el **Documento rector**, aunado a que las tres son idénticas en los planteamientos de los siguientes agravios:

- El padrón publicado en la Gaceta del diecisiete de abril de dos mil diecisiete reconoce a los *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios, y se hizo con los criterios que el Sistema de registro de la *SEPI* pretende volver a solicitar, a pesar de que el padrón no ha perdido vigencia.
- Es poco sólido que el padrón publicado en la citada Gaceta perdiera vigencia, pues las situaciones fácticas que dieron origen se mantienen.
- No es necesario volver a solicitar la información para hacer un nuevo registro o esperar a que la *SEPI* tenga por acreditada la calidad de los *lugares de autoadscripción*, sino retomar los reconocimientos de antes.
- Desconocer los padrones previos vulnera los derechos humanos colectivos de los pueblos y barrios originarios, como la progresividad y no regresión, pues las respectivas comunidades ya habían sido reconocidas como pueblos o barrios.
- El *Instituto Electoral* cuenta con información necesaria para la actualización del Marco Geográfico, debido a que el Padrón es público y no es necesario condicionar lo anterior al Sistema de Registro de la *SEPI*.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

- El *INE* ha tomado en cuenta el padrón publicado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete para llevar a cabo consultas en materia de distritación.
- El registro es un acto jurídico con efectos declarativos, mas no constitutivos. La constitución de los pueblos ya ha sido reconocida en diversos actos de gobierno a través de padrones, publicaciones de gacetas y otros. Se está interpretando al registro como la negativa de existencia de pueblos antes reconocidos.
- La negativa del reconocimiento de las comunidades de las *partes actoras* vulnera el principio de autoadscripción para establecer la pertenencia a una comunidad.
- Las comunidades no requieren pertenecer al Registro de la *SEPI*, para que el *Instituto Electoral* las incluyera en el Marco Geográfico.
- No existe alguna norma de las que rigen el funcionamiento del *IECM* que prevean que debe trabajar de forma coordinada con la *Secretaría*, o que para la realización del *Marco Geográfico* deba condicionarse al Sistema de Registro.
- La participación de los Pueblos y Barrios en el registro no es un deber jurídico.
- Es inconstitucional que el *Instituto Electoral* sólo considere como pueblos y barrios originarios a los que reconoce la *SEPI*, porque la realización del Marco Geográfico es atribución del Instituto, además de vulnerar el derecho de autoadscripción.



TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Ahora bien, del análisis integral a los mencionados agravios, se puede observar que la litis principal en los tres casos, se encuentra vinculada al reconocimiento de los *lugares de autoadscripción*, para que éstos sean incorporados en el Marco Geográfico del proceso de participación ciudadana en curso.

En este tenor, es menester precisar que en el expediente **TECDMX-JLDC-005/2023** se encuentra involucrada la comunidad de **San Pedro Xalpa**, la cual también se encuentra vinculada en el expediente **TECDMX-JLDC-007/2023**, por lo que, a efecto de no incurrir en una contradicción de sentencia procede la acumulación, ya que en ambos casos se estudiará lo procedente a la negativa del reconocimiento de esa comunidad como pueblo o barrio originario para ser incluido en el *Marco Geográfico*.

Lo mismo sucede con los expedientes **TECDMX-JLDC-005/2023** y **TECDMX-JLDC-006/2023**, respecto al reconocimiento de la comunidad de Estrella Culhuacán; aunado a que, en ambos expedientes, se plantea que con motivo de la sentencia dictada en el diverso juicio de la ciudadanía TECDMX-JLDC-24/2022, las partes actoras realizaron sendas peticiones al *IECM* y las respuestas dadas no fueron oportunas ni culturalmente adecuadas.

Por tanto, en los expedientes **TECDMX-JLDC-005/2023** y **TECDMX-JLDC-006/2023**, también se advierte una conexidad en este tópico, ya que plantean los mismos agravios respecto a

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

los oficios emitidos por el Secretario Ejecutivo y su presunta respuesta tardía.

Por todo lo antes expuesto, respecto a los tres juicios citados al rubro, al existir conexidad en los actos impugnados, los puntos de agravios y en los *lugares de autoadscripción* que pretenden su reconocimiento por parte de la *autoridad responsable* para ser considerados en el Marco Geográfico, se considera procedente la acumulación de los asuntos.

Lo anterior, no implica dejar de estudiar particularmente cada uno de los asuntos, esto debido a que cada uno de ellos contienen agravios en específico —particularidades de los *oficios impugnados*—, que también serán analizados en la presente sentencia.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia **2/2004** de la *Sala Superior*, de rubro “**ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES**”¹², en la que se prevé que los efectos de la acumulación son procesales y, en modo alguno, modifican los derechos sustantivos de las partes.

En este sentido, como se ha precisado, al existir conexidad en los tres expedientes, con la finalidad de que no exista

¹² Consultable a través del siguiente enlace: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004>



contradicción de sentencias, es que procede hacer el análisis de los asuntos de manera acumulada.

En razón de lo anterior, se ordena añadir copia certificada de los puntos resolutive de esta sentencia en los expedientes acumulados, lo que deberá ocurrir en el momento procesal oportuno.

CUARTA. Causales de improcedencia.

Previo al estudio de los requisitos de procedencia del medio de impugnación, se realiza el examen de las causales de improcedencia aducidas por la *autoridad responsable*, al estar relacionadas con aspectos necesarios para la válida instauración del proceso, y cuyo análisis es oficioso y preferente por tratarse de una cuestión de orden público.

Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 1 del *Código Electoral* y en el criterio de este órgano jurisdiccional contenido en la jurisprudencia **TEDF1EL J001/1999** de rubro **“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”**¹³.

¹³ Consultable a través del link: <https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/libro-jurisprudencias-20218dejunio.pdf>.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Ahora bien, en el presente caso, al rendir sus informes circunstanciados, la *autoridad responsable* hizo valer, en los tres juicios, como causal de improcedencia la prevista en la fracción IV del artículo 49 de la *Ley Procesal* relativa a la extemporaneidad de la impugnación del *Documento Rector*.

Asimismo, en el expediente **TECDMX-JLDC-005/2023**, la *autoridad responsable* hizo valer como causal de improcedencia la establecida en la fracción VIII, del artículo 49 de la *Ley Procesal*, relativa a la falta de agravios respecto a los acuerdos impugnados.

A continuación se analizará cada causal alegada.

❖ Extemporaneidad

La *autoridad responsable* solicita sean desechadas las demandas, por cuanto hace a la impugnación en contra del *Documento Rector* aprobado por el *Consejo General del Instituto Electoral* aprobado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante el acuerdo **IECM/ACU-CG-030/2022**, en virtud de haberse presentado fuera de tiempo.

Lo anterior, porque el referido acuerdo, se publicó en la página de internet institucional, así como en los estrados de sus oficinas centrales el **cuatro de marzo de dos mil veintidós**.



Al respecto, el artículo 42 de la *Ley Procesal* establece que los medios de impugnación se deben interponer dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél a que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable.

Así, la responsable argumenta que el término para controvertir el *Documento rector* transcurrió del siete al diez de marzo de dos mil veintidós, tomando como punto de referencia que la publicación en los estrados y en la página de internet se realizó el cuatro de marzo de dos mil veintidós

Sin embargo, los presentes medios de impugnación se interpusieron el diecinueve de enero del año en curso, por lo que a consideración de la autoridad responsable es extemporánea la impugnación sobre dicho acto.

■ Este Tribunal Electoral estima que la causal de improcedencia invocada se estima **fundada** pues como lo considera la responsable, el medio de impugnación en contra del *Documento Rector* se interpuso con una temporalidad superior a once meses posteriores a que se hizo del conocimiento público el acuerdo que se pretende impugnar.

Además, debe tomarse en consideración que en la sentencia del asunto **SCM-JDC-338/2022 y acumulados**, la *Sala Regional* determinó que el *Documento rector* se trata de un **acto definitivo y firme.**■

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

El artículo 50, fracción III, de la *Ley Procesal* establece que el Pleno de este *órgano jurisdiccional* podrá decretar el sobreseimiento cuando aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la misma norma jurídica.

En ese sentido, el artículo 49, fracción IV, de la *Ley Procesal* establece que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se presenten fuera de los plazos señalados en la citada norma jurídica.

Por tanto al resultar procedente la causal de improcedencia de extemporaneidad, **resulta procedente el sobreseimiento de las demandas, únicamente, por lo que hace a la impugnación del *Documento Rector*.**

**❖ No se advierta agravio alguno contra los acuerdos
IECM/ACU-CG/007/2023 e IECM/ACU-CG-011/2023**

En el juicio de la ciudadanía TECDMX-JLDC-005/2022 la *autoridad responsable* solicitó su desechamiento, porque a su parecer, de la lectura del escrito de demanda no se advierte agravio alguno en contra de los Acuerdos ***IECM/ACU-CG/007/2023*** e ***IECM/ACU-CG-011/2023***, ni la forma en que éstos irrigan perjuicio a la esfera jurídica de las partes actoras, o bien contravienen lo establecido en la Constitución Federal, Local o la normativa electoral vigente, por lo que su impugnación constituye una manifestación genérica, subjetiva y abstracta.



A consideración de este *Tribunal Electoral*, las manifestaciones que la *autoridad responsable* realiza como causal de improcedencia, deben ser **desestimadas**, porque la determinación de si los referidos actos conculcaron o no los derechos de las *partes actoras* son cuestiones que deben ser analizadas al resolver el fondo del asunto ya que de atenderla, se podría incurrir en el vicio lógico de petición de principio.

Al respecto, la petición de principio es un tipo de argumento falaz que consiste en incluir la conclusión en las premisas; ello, conforme a la tesis aislada I.15o.A.4 K (10a.), 3, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro: “**PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL**”.

Por tanto, a fin de no incurrir en el vicio de petición de principio y para maximizar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva de las partes actoras, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los argumentos vertidos por la *Comisión de Justicia* serán materia de análisis del fondo de la controversia, de ahí que **la causa de improcedencia aducida se desestima**.

■ Al haberse desestimado la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, corresponde analizar si la demanda cumple con los demás requisitos para su procedencia.

QUINTA. Requisitos de procedencia.

Este órgano jurisdiccional examina si los medios de impugnación satisfacen los presupuestos procesales establecidos en la normativa, con el objeto de determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

1. Forma. Las demandas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 47 de la *Ley Procesal*, porque se presentaron por escrito; se hace constar los nombre y firmas de *la partes actoras*, se identifica en cada caso, los actos impugnados, así como los hechos y los agravios de la impugnación.

No pasa desapercibido que las demandas se presentaron de manera electrónica directamente ante este Tribunal, sin embargo, esto es válido dado que la *Sala Superior* ha razonado que es posible presentar los medios de impugnación ante la autoridad jurisdiccional competente para resolver la controversia.

Al respecto, es aplicable *mutatis mutandis* la jurisprudencia 11/2021, de rubro: “**MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EL ESCRITO DE DEMANDA DEBE PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVERLO (LEGISLACIÓN ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).**”



2. Oportunidad. Por lo que hace a la impugnación de los **Acuerdos IECM/ACU-CG-007/2023 y IECM/ACU-CG-011/2023**, así como los **oficios controvertidos**, las demandas fueron presentadas oportunamente como a continuación se muestra.

El artículo 42 de la citada *Ley Procesal* precisa que todos los medios de impugnación locales deben interponerse **dentro del plazo de cuatro días**, contados a partir del día siguiente a aquél en **que la parte actora haya tenido conocimiento** del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable.

Respecto al juicio **TECDMX-JLDC-005/2023**, debe considerarse que consta en el expediente copia certificada emitida por el Secretario Ejecutivo del *IECM* del oficio **IEC/SE/60/2023**, de la que se advierte que, el trece de enero de la presente anualidad, la *responsable* notificó a las partes actoras el oficio impugnado.

Documento que tiene carácter de documental pública con valor probatorio pleno –al ser emitida por una persona funcionaria pública en ejercicio de sus funciones– en términos de los artículos 55, fracción III y 61 de la *Ley Procesal*.

En este sentido, si el acto impugnado fue notificado el trece de enero de dos mil veintitrés y la demanda se presentó el diecinueve siguiente, es evidente que se presentó dentro del

TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS

plazo de cuatro días establecido en el artículo 42 de la *Ley Procesal*, como se evidenciará a continuación:

ENERO 2023						
Viernes 13	Sábado 14	Domingo 15	Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19
Fecha de notificación del acto impugnado	Días inhábiles		<u>Día 1</u>	<u>Día 2</u>	<u>Día 3</u>	<u>Día 4</u>

En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que, la presentación de la demanda del presente medio de impugnación resulta oportuna.

Respecto al juicio **TECDMX-JLDC-006/2023**, consta en el expediente copia certificada del oficio **IEC/SE/62/2023**, de la que se advierte que, el diecisiete de enero de la presente anualidad, la *responsable* notificó a las partes actoras el oficio impugnado

Asimismo, en el expediente en que se actúa, obra copia certificada del oficio **IECM/DD28/011/2023** emitido por la Titular del Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 28 del *IECM*, de la que se desprende que se le notificó a la *actora el oficio impugnado* el trece de enero del año en curso.

Documentos que tienen carácter de documentales públicas con valor probatorio pleno –al ser emitidas por personas funcionarias públicas en ejercicio de sus funciones– en términos de los artículos 55, fracción III y 61 de la *Ley Procesal*.



**TECDMX-JLDC-005/2023
Y ACUMULADOS**

En este sentido, si el oficio **IEC/SE/62/2023**, fue notificado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés y la demanda se presentó el diecinueve siguiente, es evidente que se presentó dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 42 de la *Ley Procesal*, como se evidenciará a continuación:

Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19	Viernes 20	Sábado 21	Domingo 22	Lunes 23
Fecha de notificación del acto impugnado	<u>Día 1</u>	<u>Día 2</u>	<u>Día 3</u>	<u>Día Inhábil</u>	<u>Día Inhábil</u>	<u>Día 4</u>

Asimismo, por lo que hace al oficio, **IECM/DD28/011/2023**, si este fue notificado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés y la demanda se presentó el diecinueve siguiente, es evidente que se presentó dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 42 de la *Ley Procesal*, como se evidenciará a continuación:

ENERO 2023						
Viernes 13	Sábado 14	Domingo 15	Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19
Fecha de notificación del acto impugnado	Días inhábiles		<u>Día 1</u>	<u>Día 2</u>	<u>Día 3</u>	<u>Día 4</u>

En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que, la presentación de la demanda del presente medio de impugnación resulta oportuna.

Por otra parte, por lo que hace a la impugnación de los acuerdos **IECM/ACU-CG-CG/007/2023** e **IECM/ACU-CG-CG/011/2023**,

—impugnados en los tres expedientes al rubro citados— se debe destacar que ambos fueron emitidos por el *Consejo General* el **quince de enero de dos mil veintitrés**.

En este sentido, si los acuerdos fueron aprobados el quince de enero de dos mil veintitrés y las demandas de los tres juicios se presentaron el diecinueve siguiente, es evidente que se presentaron dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 42 de la *Ley Procesal*, como se evidenciará a continuación:

Enero de 2023				
Domingo 15	Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19
Fecha aprobación de los <i>Acuerdos impugnados</i>	<u>Día 1</u>	<u>Día 2</u>	<u>Día 3</u>	<u>Día 4</u> Presentación de las demandas

En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que, la presentación de las tres demandas resulta oportuna.

3. Legitimación. Los presentes juicios son promovidos por partes legítimas, de conformidad con lo previsto por el artículo 46, fracción IV, de la *Ley Procesal*, puesto que las demandas son promovidas por personas que se autoadscriben como integrantes de un supuesto pueblo originario.

Al respecto, resulta aplicable la **jurisprudencia 12/2013**, de rubro “**COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE**

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES¹⁴ en cual establece que la autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena de las personas integrantes de las comunidades y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan.

4. Interés jurídico. Las *partes actoras* cuentan con interés jurídico para interponer los presentes medio de impugnación pues controvierten, en síntesis, la negativa del *Instituto Electoral* de dar reconocimiento a los *lugares de autoadscripción* de las *partes actoras* como pueblos o barrios originarios.

En ese sentido, debe considerarse que este asunto se vincula con la defensa de derechos colectivos en relación con el reconocimiento de sus comunidades como pueblos o barrios originarios.

Al respecto, es aplicable lo razonado por la *Sala Regional* en la sentencia del juicio **SCM-JDC-22/2020**, en el sentido de que las personas pertenecientes a un pueblo o barrio originario pueden acudir a juicio en defensa de los derechos de ese tipo de comunidades cuando aleguen la vulneración a los derechos comunes a todos los pueblos y barrios originarios.

¹⁴ Consultable a través del siguiente enlace:
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2013&tpoBusqueda=S&sWord=12/2013>

5. Definitividad. Se colma este requisito porque la ley no establece la obligación de agotar un medio de impugnación antes de acudir a esta instancia para cuestionar el acto impugnado.

6. Reparabilidad. La materia de la controversia no se ha consumado de manera irreparable, dado que este Tribunal puede determinar la revocación de los actos impugnados y ordenar la reparación de los posibles derechos vulnerados.

SEXTA. Agravios y litis a resolver.

I. Agravios

Como se expuso en la parte considerativa de la acumulación de los presentes juicios, en los escritos de demandas se plantean los siguientes agravios:

- El padrón publicado en la Gaceta del diecisiete de abril de dos mil diecisiete reconoce a los *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios, y se hizo con los criterios que el Sistema de registro de la *SEPI* pretende volver a solicitar, a pesar de que el padrón no ha perdido vigencia.
- Es poco sólido que el padrón publicado en la citada Gaceta perdiera vigencia, pues las situaciones fácticas que dieron origen se mantienen.
- No es necesario volver a solicitar la información para hacer un nuevo registro o esperar a que la *SEPI* tenga por

acreditada la calidad de los *lugares de autoadscripción*, sino retomar los reconocimientos de antes.

- Desconocer los padrones previos vulnera los derechos humanos colectivos de los pueblos y barrios originarios, como la progresividad y no regresión, pues las respectivas comunidades ya habían sido reconocidas como pueblos o barrios.
- El *Instituto Electoral* cuenta con información necesaria para la actualización del Marco Geográfico, debido a que el Padrón es público y no es necesario condicionar lo anterior al Sistema de Registro de la *SEPI*.
- El *INE* ha tomado en cuenta el padrón publicado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete para llevar a cabo consultas en materia de distritación.
- El registro es un acto jurídico con efectos declarativos, mas no constitutivos. La constitución de los pueblos ya ha sido reconocida en diversos actos de gobierno a través de padrones, publicaciones de gacetas y otros. Se está interpretando al registro como la negativa de existencia de pueblos antes reconocidos.
- La negativa del reconocimiento de las comunidades de las *partes actoras* vulnera el principio de autoadscripción para establecer la pertenencia a una comunidad.
- Las comunidades no requieren pertenecer al Registro de la *SEPI*, para que el *Instituto Electoral* las incluyera en el Marco Geográfico.
- No existe alguna norma de las que rigen el funcionamiento del *IECM* que prevean que debe trabajar de forma

coordinada con la *Secretaría*, o que para la realización del *Marco Geográfico* deba condicionarse al Sistema de Registro.

- La participación de los Pueblos y Barrios en el registro no es un deber jurídico.
- Es inconstitucional que el *Instituto Electoral* sólo considere como pueblos y barrios originarios a los que reconoce la *SEPI*, porque la realización del Marco Geográfico es atribución del Instituto, además de vulnerar el derecho de autoadscripción.

II. Litis

Para fijar los puntos de controversia que deben resolverse, es necesario tener presente que la *Sala Superior* ha establecido que, en los juicios promovidos por personas indígenas, la autoridad electoral no sólo debe suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total.

Lo anterior tiene sustento en la **jurisprudencia 13/2008**, de rubro **“COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES”**.¹⁵

Así, de los agravios de las *partes actoras* se advierte que la *litis* a resolver se centra en determinar si fue correcta la

¹⁵

Consultable

en:

<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2008&tpoBusqueda=S&sWord=13/2008>

determinación de *Instituto* relativa a que, para actualizar el *Marco Geográfico* respecto a los pueblos y barrios originarios, es necesaria la determinación correspondiente de la *SEPI*.

SÉPTIMA. Estudio de fondo.

Debido a que la controversia versa sobre las respuestas que dieron las autoridades responsables a peticiones de las *partes actoras* respecto al reconocimiento de sus *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios, se considera necesario establecer el marco jurídico del derecho de petición, del derecho colectivo a ser reconocida como comunidad indígena y de lo resuelto por la *Sala Regional* en las sentencias de los juicios **SCM-JDC-151/2021 y acumulados**, así como **SCM-JDC-338/2022 y acumulados**.

1. Derecho de petición

Los artículos 8 y 35, de la *Constitución* reconocen el derecho de petición en materia política a favor de la ciudadanía para formular una solicitud ante cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a tal solicitud se dé contestación, en breve término, dando respuesta a lo solicitado.

En atención a ello, una vez que la autoridad reciba una petición debe, en principio, analizar si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado, pues las autoridades únicamente pueden resolver

respecto de las cuestiones que sean de su competencia. De no ser así, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia **2a./J. 183/2006** de la Segunda Sala de la Corte, cuyo rubro es “**PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA**”¹⁶.

Por otro lado, la *Sala Superior* ha considerado que para que la autoridad satisfaga plenamente el derecho de petición se deben cumplir los siguientes elementos:

- a) La recepción y tramitación de la petición.
- b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido.
- c) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza de las personas peticionarias.
- d) Su comunicación a la parte interesada.

¹⁶ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 207



Al respecto, es aplicable la **tesis XV/2016** de rubro “**DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN**”¹⁷.

También se ha señalado que para tener por colmado el derecho de petición, no basta la emisión de una resolución o acuerdo por parte de la autoridad y su debida notificación.

Sino que, al realizar el examen de la respuesta, las personas juzgadoras deben salvaguardar el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza de la parte peticionaria, al corroborar la existencia de elementos suficientes que lleven a la convicción de que la contestación cumple con el requisito de congruencia.

Es decir, debe existir correspondencia formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada por la autoridad, sin que ello implique la revisión de la legalidad material del contenido de la respuesta.

Al respecto, es aplicable la tesis **II/2016** de la *Sala Superior*, de rubro “**DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO**”¹⁸.

¹⁷ Consultable a través del siguiente enlace:
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2016&tpoBusqueda=S&sWord=XV/2016>

¹⁸ Consultable a través del siguiente enlace:
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2016&tpoBusqueda=S&sWord=II/2016>

En cuanto al plazo para que las autoridades respondan a las peticiones, la *Sala Superior* ha interpretado que la frase “breve término” debe interpretarse a partir de la naturaleza de la materia electoral, por lo cual, en cada caso deben tomarse en cuenta las circunstancias para dar una respuesta oportuna.

Lo anterior, fue razonado en la jurisprudencia **32/2010** de rubro **“DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN “BREVE TÉRMINO” ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO”**.

2. El derecho al reconocimiento de las comunidades indígenas

En el artículo 2º constitucional se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a su consecuente autonomía para, entre otros aspectos, ejercer su derecho al autogobierno.

El derecho de autodeterminarse es indispensable para la preservación de sus culturas, las cuales constituyen un componente esencial del Estado Mexicano, que se caracteriza por tener una composición pluricultural sustentada originalmente en tales culturas.

La personalidad distintiva de los pueblos indígenas no sólo es cuestión de lengua y otras expresiones culturales, sino el resultado de la reproducción social permanente del grupo a



través del funcionamiento de sus propias instituciones sociales y políticas.

De ahí que generalmente el mantenimiento de la identidad étnica se encuentre estrechamente vinculada con el funcionamiento de esas instituciones.

La identidad étnica da origen a grupos culturales que comparten historia, tradiciones, costumbres, visiones del mundo (cosmovisión) y lenguaje, y constituye la base a partir de la cual los integrantes de ese grupo cultural construyen sus instituciones, autoridades y tradiciones.

Por ello, cuando las comunidades indígenas reclaman el derecho a mantener su organización, tienen como finalidad la preservación de su cultura y de su existencia, pues la presencia de tales instituciones constituye un elemento central de su identidad.

Por tanto, la existencia y defensa de las instituciones propias de los pueblos indígenas y de sus formas de autogobierno y autorganización conforman una parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena y es en gran medida lo que distingue a los pueblos indígenas de otros sectores de la población nacional.

De hecho, el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas actualmente se entiende como un elemento que al proporcionarles autonomía contribuye a su adecuado desarrollo.

Como se advierte, uno de los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en el texto constitucional como en los tratados internacionales consiste en la posibilidad de decidir sus formas internas de convivencia y organización, la aplicación de sistemas normativos propios, así como la elección mediante procedimientos y prácticas electorales de las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno.

Esto también se ve reflejado en disposiciones internacionales como el artículo 1, párrafo 1, de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales, que establecen: *todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, y que en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.*

En el mismo sentido, el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

En el artículo 4 de la misma Declaración se reconoce que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno



en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Por su parte, debe recordarse que el autogobierno, la autorganización y autogestión de los pueblos indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales constituye un elemento fundamental para fortalecer la capacidad y participación política de estos pueblos para asumir la titularidad de sus derechos, ejercerlos en un marco de respeto a los derechos humanos y exigir su cumplimiento.

De lo anterior resulta que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas constituyen el reconocimiento de las necesidades específicas de estos grupos en condiciones estructurales de desventaja y tienen como objetivo que dichos pueblos puedan gozar del ejercicio pleno de sus derechos.

Ahora bien, es importante destacar que el derecho a la autonomía con el que cuentan las comunidades indígenas es un derecho fundamental, por lo que todas las autoridades se encuentran obligadas a: 1) promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho; 2) interpretar las normas que conforman el marco jurídico que lo rige con un criterio extensivo y, 3) aplicarlas acorde con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, en término del artículo 1 de la *Constitución*.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Por ello, es deber de las autoridades del estado proteger el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas a preservar su organización, su cultura y la existencia de sus propias instituciones.

Tal protección se debe implementar considerando las características de cada pueblo y comunidad, toda vez que existen diferentes modalidades de ejercicio del derecho a la autonomía reconocido constitucionalmente, dada la diversidad de regulaciones y de manifestaciones de la diversidad cultural indígena en nuestro país.

En el caso de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, su reconocimiento se traduce en la protección de diversos derechos, entre ellos, la obligación de las autoridades estatales de respetar y garantizar la decisión de estas comunidades sobre los proyectos que deben desarrollarse con el presupuesto participativo (SUP-REC-35/2020 y acumulados).

3. Registro de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México

En la *Constitución Local* se reconoce que la Ciudad de México es plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes (artículo 2).



Por su parte, el artículo 58, párrafo 2 de la *Constitución Local* establece que los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas.

La *Constitución Local* también reconoce el derecho de autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes.

Por otro lado, el artículo 9 de la *Ley de Pueblos* establece que la *SEPI* implementará un Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que deberá mantener actualizado.

De conformidad con la citada norma, el Gobierno emitirá los procedimientos para la acreditación de la condición de pueblos, barrios y comunidades, así como para el registro de sus integrantes.

En ese sentido, la *SEPI*, con la participación de los pueblos, emitirá los criterios para la identificación y registro del pueblo, barrio o comunidad indígena que se trate.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

A partir de lo anterior, los pueblos, barrios y comunidades, por conducto de sus asambleas y autoridades representativas, podrán registrar:

- Los antecedentes que acreditan su condición,
- Los territorios y espacios geográficos donde están asentados.
- Los sistemas normativos propios mediante los cuales eligen a sus autoridades o representantes.
- Sus autoridades tradicionales y mesas directivas.
- El registro de personas integrantes de las asambleas con derecho a voz y voto.
- La composición de su población por edad y género, etnia, lengua y variantes, y cualquier indicador relevante que, para ellos, deba considerarse.

4. Elaboración del *Marco Geográfico*

De conformidad con los artículos 98 y 120 de la *Ley de Participación*, antes de la celebración de la elección de las COPACO y la consulta sobre presupuesto participativo, es necesario la emisión de una convocatoria.

En la convocatoria se debe incluir el catálogo de unidades territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales. Cabe aclarar que, de conformidad con el artículo 2, fracción XXVI, de la *Ley de Participación*, las unidades territoriales son las colonias y unidades habitacionales que establece el *Instituto*.



Esto es relevante porque la elección de las COPACO y la consulta sobre presupuesto participativo se da por cada unidad territorial que reconozca el *Instituto* (artículos 83 y 120 de la *Ley de Participación*).

Por su parte, en el caso de los pueblos y barrios originarios, la *Sala Superior* estableció que éstos tienen el derecho de determinar los proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus comunidades, en los que se ejercerá el recurso del presupuesto participativo que les corresponda, de conformidad con su propia normativa interna **(SUP-REC-35/2020)**. Además de poder nombrar a sus propias autoridades.

Precisamente, la actualización de las unidades territoriales y de los pueblos y barrios originarios se realiza mediante la elaboración del Marco Geográfico de participación ciudadana, cuya aprobación le corresponde al *Consejo General*, como se establece en el artículo 50, fracción XXIII del *Código Local*.

Para la elaboración del citado Marco, la Comisión de Organización y Geoestadística del *Instituto* debe elaborar un proyecto de dictamen sobre ese tema (artículo 62, fracción XI del *Código Local*).

Por su parte, de acuerdo con el artículo 96, fracción XI, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

le corresponde mantener actualizado el *Marco geográfico* para la utilización de procedimientos de participación ciudadana, clasificado por circunscripción, demarcación territorial, colonia y sección.

5. Sentencias sobre el tema

a. Sentencia del asunto TECDMX-JLDC-29/2020 y acumulados¹⁹

En la citada sentencia se razonó que, si los lugares de autoadscripción de las partes actoras de esos juicios no formaban parte del Catálogo aprobado por el *Instituto*, para el proceso participativo de dos mil veinte, no podían aplicarse los mismos efectos respecto de los pueblos y barrios que sí estaban incluidos como tales.

También se indicó, respecto a la pretensión de que los lugares de autoadscripción fueran reconocidos como pueblos y barrios originarios, que el *Instituto* y otras autoridades tienen una serie de obligaciones a fin de identificar a otros segmentos de la población que pudieran tener ese reconocimiento.

De igual modo, se reconoció que el *Instituto* tiene la posibilidad de intercambio de información con otras autoridades electorales,

¹⁹ Emitida el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno



instituciones públicas o privadas, de la Ciudad de México o federales, relacionadas con el tema de pueblos y barrios originarios en la Ciudad.

Asimismo, se señaló que el *Instituto* también puede llevar a cabo consultas o asambleas hechas a las instancias representativas, autoridades tradicionales y personas integrantes de los pueblos y barrios.

Por lo que se reconoció que esos trabajos podían generar un impacto en la labor que la *Secretaría de Pueblos* tiene a su cargo, y con ello la posibilidad de incorporar más comunidades al Catálogo y Marco Geográfico.

De igual modo, se señaló que existe un deber de coordinación y coadyuvancia entre el *Instituto Electoral* y la *SEPI*, y las demás autoridades competentes, a fin de contar con los mayores elementos que permitan identificar a los pueblos y barrios originarios, y así actualizar el *Marco Geográfico* y el Catálogo correspondiente.

Además, se indicó que la *SEPI* está en proceso de elaboración del Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, cuya conclusión eventualmente tendría un impacto en la labor del *Instituto* al diseñar el *Marco Geográfico* y el Catálogo de Pueblos y Barrios.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

En ese sentido se vinculó a la *SEPI* y a las demás autoridades competentes para que continuaran con su trabajo a fin de implementar el referido sistema y los procedimientos para la acreditación de pueblo o barrio originario.

Se vinculó al *Instituto* para coadyuvar con esa labor y, una vez hecho lo anterior, debía llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar el *Marco Geográfico* y el Catálogo de Pueblos y Barrios Originarios.

b. Sentencia de los asuntos SCM-JDC-150/2021 y acumulados

En el citado asunto, la *Sala Regional* determinó modificar la sentencia emitida por este Tribunal en el expediente **TECDMX-JLDC-29/2020 y acumulados**, por las siguientes consideraciones.

Razonó que las comunidades distintas a los pueblos y barrios originarios incluidos en el *Marco Geográfico* para el proceso participativo de dos mil veinte, podían ser reconocidos como tales, **siempre que se les reconozca como tales por parte del *Instituto***. Pues de lo contrario, se incumpliría con lo ordenado por la *Sala Superior*, en el asunto **SUP-REC-35/2022**.

En la misma sentencia se razonó que, para el caso, la autoadscripción de las partes actoras de esos juicios no conlleva



a que se reconocieran como pueblos y barrios originarios a los lugares a los que se autoadscribieron, **pues ello depende del reconocimiento que realicen las autoridades competentes.**

En todo caso, la autoadscripción únicamente tiene como efecto la obligación de realizar un análisis con perspectiva intercultural.

Por otro lado, la *Sala Regional* consideró que este Tribunal no precisó que el procedimiento para la acreditación de la condición de pueblo o barrio originario debía realizarse previo a la realización del próximo proceso de participación ciudadana relacionado con COPACO, con el objeto de que, de ser el caso, los pueblos y barrios a los que pertenece las partes actoras de esos juicios, se les otorgue tratamiento como tales

Asimismo, señaló que lo procedente era modificar la sentencia de este Tribunal, para vincular a la *SEPI* y demás autoridades relacionadas para establecer un cronograma de trabajo, para que antes de la celebración del siguiente procedimiento de participación ciudadana en que se designen COPACO, en el ámbito de sus competencias, se concluya con el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como el *Marco Geográfico* y Catálogo de Pueblos y Barrios Originarios.

c. Sentencia del asunto TECMDX-JLDC-141/2022 y acumulados

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

En la citada sentencia se analizó el oficio mediante el cual el *Instituto Electoral* negó reconocer a San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón como pueblo originario, pues ello dependía de la información que proporcionara la *SEPI*.

La sentencia revocó la respuesta del *Instituto*, esencialmente, por las siguientes consideraciones:

- Se concluyó que el *Instituto Electoral* tiene participación para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios en materia política, por lo cual, también deben participar en el proceso de reconocimiento de este tipo de comunidades cuando se pretendan ejercer derechos político-electorales, como es el caso de los procesos de participación ciudadana.
- La respuesta del *Instituto Electoral* fue indebida porque se limitó a señalar que la actualización del marco geográfico depende de la información que remita la *SEPI*, ya que ello significaría dejar de ejercer las atribuciones que tiene dicha autoridad para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios en el ámbito político-electoral.
- El *Instituto Electoral* estaba obligado a dar una respuesta con perspectiva intercultural, es decir, una vez realizada una investigación exhaustiva respecto al pueblo de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón.



d. Sentencia de los asuntos SCM-JDC-388/2022 y acumulados

En la citada sentencia la *Sala Regional* determinó revocar la sentencia emitida por este Tribunal en el asunto **TECDMX-JLDC-141/2022 y acumulados**, pues consideró que la sentencia impugnada generó una situación de falta de certeza de jurídica, ya que la coordinación de las autoridades para la aprobación del marco geográfico para los procedimientos de participación ciudadana dos mil veintitrés tiene como base lo establecido en la sentencia del **SCM-JDC-150/2021 y acumulados**, así como los acuerdos aprobados por el *Instituto*.

Para llegar a esa conclusión, razonó que el *Documento rector* y la sentencia del juicio **SCM-JDC-150/2021 y acumulados** se encontraban firmes, por lo que era indispensable que la *SEPI* y el *Instituto* realizaran acciones coordinadas.

Por ello, en el caso concreto, era necesario que el *Instituto* recibiera de la *SEPI* información relativa a la identificación de los pueblos y barrios originarios a partir de la implementación del sistema de registro.

Razonó que ello no es excluyente de que si el *Instituto Electoral*, a través del desempeño de sus atribuciones, cuenta con el reconocimiento de diversos pueblos originarios —**a través del catálogo previamente aprobado**— lo tome en consideración.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Pero, por otra parte, la *SEPI* se encuentra obligada a remitir a la brevedad la información para que el *Instituto Electoral* pueda incluirla en los trabajos de actualización del marco geográfico electoral.

La *Sala Regional* señaló que es necesario que, tratándose del *Marco geográfico* que se utilizará para la consulta del presupuesto participativo dos mil veintitrés, primero se concluyan los trabajos que de manera coordinada se encuentran realizando la Secretaría de Pueblos Originarios y el *Instituto Electoral*.

Así, a partir de la *Convocatoria*, la *SEPI* determinará lo conducente respecto de las solicitudes de reconocimiento de pueblos originarios que, en su caso, fueron presentadas.

Realizado lo anterior y con base en la información que le proporcione la *Secretaría de Pueblos*, el *Instituto Electoral* procederá a realizar las modificaciones al marco geográfico electoral para los procesos de participación ciudadana, a desarrollarse en este año dos mil veintitrés.

Ello, porque consideró que existe una programación para la implementación de un *Sistema de Registro* en el que se ordenó al *Instituto Electoral* (**SCM-JDC-150/2021 y acumulados**) trabajar de manera coordinada con la *SEPI*.



De abrirse dos procedimientos de forma paralela y ante diversas instancias en los que se busca el reconocimiento como pueblo originario generaría confusión y falta de certeza jurídica

Esto, pues ya fue emitida una convocatoria en la que se invitó a las comunidades y pueblos originarios a organizarse y presentar los requisitos conducentes para ser identificados como pueblos originarios.

Por lo que es necesario que primero se concluya con los trabajos que realiza la *SEPI*, previo a que se inste al *Instituto Electoral* a que realice diversas acciones para identificar a pueblos originarios.

Lo anterior, en razón de que, los trabajos de coordinación entre el *Instituto Electoral* y la *Secretaría de Pueblos* derivan de lo ordenado la propia *Sala Regional* en el asunto **SCM-JDC-150/2021 y acumulados**.

En ese sentido, la *Sala Regional* señaló que, al estar en curso los trabajos de la *SEPI* para la identificación de comunidades indígenas y originaria, lo cual tendría impacto en el ámbito electoral para los procedimientos de participación ciudadana a celebrarse en este año, no era pertinente ordenar al *Instituto Electoral* que de forma simultánea realizara acciones para identificar a un pueblo originario.

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

También señaló que el *Sistema de Registro* debe ser entendido como una herramienta que, en el caso, permitirá maximizar el ejercicio de derechos de las comunidades indígenas y originarias de la Ciudad de México de manera que tanto sus integrantes como el resto de la población y las autoridades tengan certeza en torno al reconocimiento que haga la *SEPI*.

De igual manera, la *Sala Regional* señaló que el *Sistema de Registro* no limita las facultades del *Instituto* en torno al *Marco Geográfico* porque siempre que tome en consideración la información que le remita la *Secretaría de Pueblos* como un insumo principal.

En ese sentido, concluyó que el *Marco Geográfico* puede modificarse siempre que exista la identificación de un pueblo originario, pero, conforme a lo ordenado en la sentencia del juicio **SCM-JDC-150/2021 y acumulados**, para los siguientes procesos participativos, debe ser remitida primero la información por parte de la *SEPI*.

También indicó que, si bien no se desconocía que exclusivamente en lo que compete a la materia electoral, el *Instituto Electoral* tiene competencia para garantizar a las personas integrantes de la comunidad la protección de sus derechos político-electorales, era necesario que previamente se concluyan los trabajos ordenados en la sentencia **SCM-JDC150/2021 y acumulados**, respecto a la identificación de



pueblos originarios en coordinación con la *Secretaría de Pueblos* y la participación directa de las comunidades involucradas.

6. Caso concreto

Las *partes actoras* —mediante sendos escritos de petición— solicitaron al *Instituto Electoral* que reconociera a los *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios a fin de que los mecanismos de democracia participativa, previstos en la *Ley de Participación*, sean realizados conforme a los derechos colectivos reconocidos a los pueblos y barrios originarios de esta Ciudad, precisando que no debía ser condicionada tal petición al registro realizado por la *SEPI*, toda vez que no existe disposición legal que así lo establezca.

Sobre este tema, los oficios impugnados del *Secretario Ejecutivo* señalaron, esencialmente, que:

- La *Secretaría de Pueblos* es la autoridad competente para otorgar el reconocimiento de la condición de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México.
- Una vez que ello ocurra, dicha *Secretaría de Pueblos* deberá comunicarlo al *IECM* a efecto de modificar el Marco Geográfico de Participación Ciudadana.

De igual forma, en el expediente del juicio de la ciudadanía **TECDMX-JLDC-006/2023**, se precisó que también se realizó una petición al Órgano Desconcentrado 28 del *IECM*, a efecto de

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

que la comunidad de *Estrella Culhuacán* sea ingresada a la cartografía, ya que “*se trata de un barrio originario*”.

Al respecto, en la Titular del referido órgano, dio contestación —a través del oficio impugnado—, en los siguientes términos:

- La *SEPI* no ha remitido información del registro de los pueblos y barrios originarios, por lo que se está a la espera de que se envíe la información respectiva para que, de ser el caso, se realicen los ajustes al estatus de la unidad territorial Estrella Culhuacán, para darle el tratamiento como barrio/pueblo originario en el Marco Geográfico de participación ciudadana a utilizarse en la consulta de presupuesto participativo 2023 y 2024.
- Que de la revisión a los archivos que obran en las distintas áreas del Instituto Electoral, no se desprende información que reconozca el carácter de barrio originario a Estrella Culhuacán en Iztapalapa.
- Que el reconocimiento y registro al Sistema de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México es una atribución que corresponde a *SEPI*.

A continuación, se analizarán los temas que se plantearon en la demanda en contra de estas determinaciones.



a. Reconocimiento por parte del Instituto

Las *partes actoras* sostienen que el *Instituto* tiene la atribución de reconocer la calidad de pueblos o barrios originarios de los *lugares de autoadscripción*, pues además de contar con la atribución, consta en diversos documentos como:

- El padrón publicado en la Gaceta del diecisiete de abril de dos mil diecisiete y porque el *INE* ha tomado en cuenta ese padrón.
- “Guía para la protección de los derechos político-electorales de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de este Tribunal”.

Al respecto, este Tribunal considera que el planteamiento es **infundado**.

Lo anterior, porque ciertamente —como se expuso— al *Instituto Electoral* tiene la atribución de aprobar el *Marco Geográfico* para los procesos de participación ciudadana y mantener su actualización.

Sin embargo, en atención a lo resuelto por la *Sala Regional* en el asunto **SCM-JDC-338/2022 y acumulados**, existe un proceso coordinado entre la *SEPI* y el *Instituto* para estudiar cuáles son los pueblos y barrios originarios de esta Ciudad.

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

Y resulta que, la *SEPI* tiene la obligación de mantener actualizado dicho *Sistema de Registro* de tales pueblos y barrios, para que una vez que esa autoridad determine cuáles son los pueblos y barrios de la Ciudad, lo informe al *Instituto* para que este actualice su *Marco Geográfico*.

En ese sentido, la *Sala Regional* ha señalado que no se pueden establecer dos procedimientos simultáneos para identificar cuáles son pueblos y barrios originarios —uno a cargo de la *SEPI* y otro por parte del *Instituto*— porque esto afectaría a los principios de certeza y de seguridad jurídica.

De tal modo que, en atención a lo resuelto en los juicios **SCM-JDC-338/2022 y SCM-JDC-150/2021 y acumulados** (con sus respectivos acumulados), lo que debe ocurrir es que, en atención al procedimiento establecido, primero, la *SEPI* debe informar sobre la identificación de los pueblos y barrios originarios de esta Ciudad para que, posteriormente, el *Instituto Electoral* actualice el *Marco Geográfico*.

Por tanto, como se observa, fue correcto que en los *oficios impugnados* el *Instituto Electoral* indicara que se encuentra a la espera de la información que remita la *Secretaría de Pueblos*.

Además, respecto a los padrones²⁰ o documentación a la que aluden las partes actoras, en la que existe el supuesto

²⁰ Publicado en la Gaceta del diecisiete de abril de dos mil diecisiete.



reconocimiento de los *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios, en atención al procedimiento establecido —cuyo sustento son las sentencias de los juicios **SCM-JDC-338/2022 y SCM-JDC-150/2021 y acumulados**—, en su caso, le correspondería a la *Secretaría* pronunciarse sobre ello en primera instancia, pues ésta se encuentra realizando la actualización del *Sistema de Registro*.

Por lo que, en atención a ello, no sería válido realizar un análisis independiente, por separado y simultáneo por parte del *Instituto* sobre el reconocimiento de pueblos y barrios originarios (que no haya reconocido previamente), mientras al mismo tiempo la *Secretaría* se encuentra realizando una actividad similar.

Por su parte, es cierto que en la “*Guía para la protección de los derechos político-electorales de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes*” de este Tribunal, se insertó un cuadro titulado “Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”, en el que se encuentran algunos de los *lugares de autoadscripción*, como se evidencia a continuación:

EXPEDIENTE	Lugares de autoadscripción	GUÍA
JLDC-005/2023	San Pedro Xalpa	✓
	San José Tula*	
	Los Reyes Culhuacán	✓
	Estrella Culhuacán	
	San Simón Culhuacán*	
	Tonatlán	
	Santa María Tomatlán	✓
	San Antonio Culhuacán*	
	8 Barrios Iztapalapa	
	Pueblo San Andrés Tomatlán	✓
JLDC-006/2023	Estrella Culhuacán	

TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS

JLDC-007/2023	San Pedro Xalpa	✓
	San Juan Tlilhuaca	✓
	San Bartolito Cahualtongo	

*En la página 16 de la Guía de Pueblos y Barrios, aparece en la columna denominada: “Pueblo”, el nombre Culhuacán; y en la columna titulada: “Barrios”, se aprecian los nombres San Antonio, San Simón, Tula y Culhuacán Cabecera.

Sin embargo, este no es un documento con valor oficial para efectos del reconocimiento de algún lugar como pueblo o barrio originario, incluso en el mismo se señala que:

“Este cuadernillo es un instrumento de proximidad ciudadana que implementa el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el fin de orientar e informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos político electorales y facilitar el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.

Por lo anterior, este cuadernillo no vincula al Tribunal Electoral de la Ciudad de México a sustanciar o resolver la denuncia en un determinado sentido, debiéndose observar en todo momento el principio de igualdad procesal y las formalidades esenciales del proceso ordinariamente requeridas por la normatividad en la materia”.

De tal modo que tal guía solo es un documento orientativo, sin que constituya una determinación oficial de este Tribunal Electoral, ya que, se insiste, esa aprobación recae en la *Secretaría de Pueblos*.

Además, no le asiste la razón a las *partes actoras* al señalar que no tiene sustento jurídico que el *IECM* y la *SEPI* trabajen de manera coordinada, pues el artículo 9, párrafo 4, de la *Ley de Pueblos* prevé que para la delimitación del espacio geográfico de los pueblos y barrios se realizará coordinación entre diversas autoridades dentro de las que se encuentran el *Instituto Electoral* y la *Secretaría de Pueblos*.



Lo que demuestra que para la identificación de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad es válida la coordinación entre el *IECM* y la *SEPI*, máxime que el espacio geográfico o territorio es uno de los elementos relevantes para las comunidades indígenas.

Adicionalmente, en las sentencias de los juicios **SCM-JDC-338/2022 y SCM-JDC-150/2021 y acumulados**, se estableció la coordinación entre esas autoridades y la imposibilidad de que dichas autoridades lleven a cabo de manera simultánea trabajos de registro o reconocimiento de la calidad de pueblos.

b. Autoadscripción

Las *partes actoras* sostienen que basta con la autoadscripción para que se reconozca a sus comunidades.

Al respecto, en los escritos de demanda las partes actoras citan la jurisprudencia **1a./J. 57/2022 (11a.)**, de la Primera Sala de la *Suprema Corte* de rubro “**AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O UN RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN**”.

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

En ella, se describe que la citada Sala de la *SCJN* validó la decisión de un Juez de Distrito de reconocer el carácter de indígena a una comunidad quejosa sólo por su autoadscripción. Lo anterior, porque los tratados internacionales y el artículo 2 de la *Constitución Federal* establecen que es la conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental para determinar a quiénes se les debe considerar y aplicar las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Por ello, su reconocimiento no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos.

De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad²¹.

Por tanto, se considera que el planteamiento es **infundado**.

Al respecto, debe recordarse que, de conformidad con lo establecido en las sentencias de los juicios **SCM-JDC-338/2022 y SCM-JDC-150/2021 y acumulados**, primero debe pronunciarse la *SEPI* respecto a la identificación de cuáles son

²¹ "Por su parte, la *Sala Superior* ha razonado que el hecho de que una persona o grupo de personas se identifiquen y autoadscriban con el carácter de indígenas, es suficiente para considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad y que, por tanto, deben regirse por las normas especiales que las regulan, lo cual consta en la jurisprudencia **12/2013**, de rubro "**COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES**".



los pueblos y barrios originarios y, posteriormente, el *Instituto* actualizará el *Marco Geográfico*.

Esto, porque para no vulnerar los principios de certeza y seguridad jurídica, no pueden existir dos procedimientos simultáneos de identificación de los pueblos y barrios originarios por parte del *Instituto Electoral* y de la *SEPI*.

En ese sentido, de acuerdo con ese procedimiento, no se ha vulnerado el derecho de la comunidad porque la *SEPI* no ha negado la calidad de pueblo; por el contrario, según lo narrado en los *oficios impugnados*, cuando la *Secretaría* emita pronunciamiento sobre la procedencia de registro de los lugares de autoadscripción, se tomará en cuenta para la actualización del *Marco Geográfico*.

Fortalece lo anterior, lo razonado por la *Sala Regional* en el asunto **SCM-JDC-150/2021 y acumulados**, en el sentido de que los elementos que acrediten como originario a un pueblo o barrio, deben ser considerados por la *SEPI* en la elaboración del *Sistema de registro*, y en su caso, posteriormente por el *Instituto*.

Además, en la sentencia del mismo asunto la *Sala Regional* indicó que para que una comunidad pudiera ser reconocida como pueblo o barrio originario para efectos de los procesos de participación ciudadana era necesario su reconocimiento por la autoridad competente, porque así lo estableció la *Sala Superior* en la sentencia del asunto **SUP-REC-35/2020**.

Pues —como lo explicó la *Sala Regional*— en esa sentencia sólo se reconocieron a cuarenta y ocho pueblos originarios contemplados en el *Marco Geográfico* de ese año, por lo que, por exclusión, las comunidades que no se encuentren dentro de tal Marco Geográfico tienen el carácter de unidades territoriales, colonia o unidades habitacionales, pero no de pueblos o barrios originarios.

Incluso, en el asunto **SCM-JDC-150/2021 y acumulados** se razonó que la autoadscripción de las partes actoras de ese juicio no conlleva a que se les reconocieran como pueblos y barrios originarios, **pues ello depende del reconocimiento que realicen las autoridades competentes.**

Cabe señalar que dicha sentencia es definitiva y firme, por lo que debe regir en el procedimiento de actualización del *Marco Geográfico* de participación ciudadana respecto a los pueblos y barrios originarios.

c. Vulneración al principio de progresividad

Las *partes actoras* sostienen que al no reconocerse a sus *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios, se vulneran los principios de progresividad y no regresión, puesto que esa calidad ya ha sido reconocida en otros padrones.

La *Suprema Corte* ha explicado que el principio de progresividad implica gradualidad y progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.

En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la **prohibición de regresividad** del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual.

Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia **2a./J. 35/2019 (10a.)**, de rubro “**PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO**”²².

En ese sentido, en atención a la **prohibición de regresividad** las personas legisladoras tienen prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos.

Por su parte, las personas aplicantes tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto

²² Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 980.

es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia **1a./J. 85/2017 (10a.)**, de rubro “**PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS**”²³.

Por su parte, la *Sala Superior* también ha reconocido que el principio de progresividad tiene dos vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías.

La segunda, obliga al Estado a limitar las modificaciones —formales o interpretativas— al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia **28/2015**, de rubro “**PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES**”²⁴.

²³ Consultable a través del siguiente enlace:
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=32/2010&tpoBusqueda=S&sWord=32/2010>

²⁴ Consultable a través del siguiente enlace:
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2015&tpoBusqueda=S&sWord=28/2015>



Una vez que se ha expuesto lo anterior, se considera que las *partes actoras* no tienen razón al sostener que se vulnera el principio de progresividad en su vertiente de prohibición de regresión, sobre la base de que sus *lugares de autoadscripción* han sido reconocidos como pueblos o barrios originarios en el padrón de publicado en la Gaceta de diecisiete de abril de dos mil diecisiete.

Al respecto, en efecto, algunos de los lugares de autoadscripción aparecen en el citado padrón como se evidencia a continuación:

EXPEDIENTE	Comunidades	Gaceta de 17 de abril de 2017
JLDC-005/2023	San Pedro Xalpa	✓
	San José Tula	
	Los Reyes Culhuacán	✓
	Estrella Culhuacán	
	San Simón Culhuacán	
	Tonatlán	
	Santa María Tomatlán	✓
	San Antonio Culhuacán	
	8 Barrios Iztapalapa	
	Pueblo San Andrés Tomatlán	✓
JLDC-006/2023	Estrella Culhuacán	
JLDC-007/2023	San Pedro Xalpa	✓
	San Juan Tlilhuaca	✓
	San Bartolito Cahualtongo	

Sin embargo, como se explicó, de acuerdo con el procedimiento implementado entre la *Secretaría de Pueblos y el Instituto Electoral*, le corresponde en primera instancia a la *SEPI* acabar los trabajos sobre la actualización del *Sistema de Registro*, para después informar esto al *Instituto* y éste actualice el *Marco Geográfico*.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

A partir de lo anterior, se puede sostener que no se advierte afectación al principio de progresividad en perjuicio de las partes actoras porque, en atención a la secuencia del citado procedimiento, no existe una determinación de la *SEPI* que niegue el reconocimiento de sus *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios, ni que como consecuencia de ello el Instituto haya dejado de actualizar el *Marco Geográfico*.

Un segundo argumento para afirmar que las *partes actoras* no tienen razón es que se sustentan en una premisa errónea de que sus *lugares de autoadscripción* antes han sido reconocidos como pueblos o barrios originarios.

Sin embargo, para efectos de los procesos de participación ciudadana los *lugares de autoadscripción* no han formado parte de los pueblos y barrios originarios reconocidos por el *Instituto Electoral*.

En efecto, en el acuerdo **IECM/ACU/CG-076/2019** (correspondiente a la aprobación del *Marco Geográfico* para el proceso de participación ciudadana del año dos mil veinte), y en el acuerdo **IECM/ ACU-CG-028/2020** (por el que se canceló la elección de las *COPACO* y la consulta sobre presupuesto participativo para los pueblos y barrios originarios en el proceso del mismo año), sólo se reconocen a las siguientes comunidades



**TECDMX-JLDC-005/2023
Y ACUMULADOS**

con tal calidad²⁵:

NO.	NOMBRE DEL PUEBLO	ALCALDÍA
1	SAN LORENZO ACOPILO	CUAJIMALPA DE MORELOS
2	SAN MATEO TLALTENANGO	CUAJIMALPA DE MORELOS
3	SAN PABLO CHIMALPA	CUAJIMALPA DE MORELOS
4	SAN PEDRO CUAJIMALPA	CUAJIMALPA DE MORELOS
5	LA MAGDALENA ATLITIC	MAGDALENA CONTRERAS
6	SAN BERNABE OCOTOPEC	MAGDALENA CONTRERAS
7	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE	MAGDALENA CONTRERAS
8	SAN NICOLÁS TOTOLAPAN	MAGDALENA CONTRERAS
9	SAN AGUSTÍN OHTENCO	MILPA ALTA
10	SAN ANTONIO TECOMITL	MILPA ALTA
11	SAN BARTOLOME XICOMULCO	MILPA ALTA
12	SAN FRANCISCO TECOXP	MILPA ALTA
13	SAN JERONIMO MIACATLAN	MILPA ALTA
14	SAN JUAN TEPENAHUAC	MILPA ALTA
15	SAN LORENZO TLACOYUCAN	MILPA ALTA
16	SAN PABLO OZTOTEPEC	MILPA ALTA
17	SAN PEDRO ATOCPAN	MILPA ALTA
18	SAN SALVADOR CUAUHTENCO	MILPA ALTA
19	SANTA ANA TLACOTENCO	MILPA ALTA
20	SAN ANDRÉS MIXQUIC	TLÁHUAC
21	SAN FRANCISCO TLALTENCO	TLÁHUAC
22	SAN JUAN IXTAYOPAN	TLÁHUAC
23	SAN NICOLAS TETELCO	TLÁHUAC
24	SAN PEDRO TLAHUAC	TLÁHUAC
25	SANTA CATARINA YECAHUIZOTL	TLÁHUAC

²⁵ Los acuerdos citados se invocan como hechos notorios en términos del artículo 52 de la *Ley Procesal*, puesto que fueron publicados en la página oficial del Instituto:
<https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-CG-076-2019.pdf>
<https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-028-2020.pdf>
Además, es aplicable la jurisprudencia XX.2o. J/24, de los Tribunales Colegiados, de rubro “**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR**”, J; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470. XX.2o. J/24.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS

26	SANTIAGO ZAPOTITLAN	TLÁHUAC
27	LA MAGDALENA PETLACALCO	TLALPAN
28	PARRES EL GUARDA	TLALPAN
29	SAN ANDRES TOTOLTEPEC	TLALPAN
30	SAN MIGUEL XICALCO	TLALPAN
31	SAN MIGUEL AJUSCO	TLALPAN
32	SAN MIGUEL TOPILEJO	TLALPAN
33	SAN PEDRO MARTIR	TLALPAN
34	SANTO TOMAS AJUSCO	TLALPAN
35	SAN ANDRES AHUAYUCAN	XOCHIMILCO
36	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA	XOCHIMILCO
37	SAN GREGORIO ATALPULCO	XOCHIMILCO
38	SAN LORENZO ATEMOAYA	XOCHIMILCO
39	SAN LUCAS XOCHIMANCA	XOCHIMILCO
40	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	XOCHIMILCO
41	SAN MATEO XALPA	XOCHIMILCO
42	SANTA CECILIA TEPETLAPA	XOCHIMILCO
43	SANTA CRUZ ACALPIXCA	XOCHIMILCO
44	SANTA CRUZ XOCHITEPEC	XOCHIMILCO
45	SANTA MARÍA NATIVITAS	XOCHIMILCO
46	SANTA MARÍA TEPEPAN	XOCHIMILCO
47	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	XOCHIMILCO
48	SANTIAGO TULYEHUALCO	XOCHIMILCO

Cabe señalar que el anterior listado fue reconocido por la *Sala Superior* en el asunto **SUP-REC-35/2020**.

De la revisión del listado referido no se encuentran los *lugares de autoadscripción*, por lo cual, si **no han sido reconocidos** antes **para efectos de los procesos de participación ciudadana**, no puede afectarse en su perjuicio el principio de no regresividad.

Debido a que se han desestimado los agravios planteados por las *partes actoras* lo procedente es **confirmar los oficios impugnados** por lo que hace a la negativa de reconocimiento de los lugares de adscripción como pueblos o barrios originarios, ya



que, como se ha expuesto, previamente deberá realizarlo la *SEPI*.

Ahora bien, es importante destacar que la impugnación de los acuerdos **IECM/ACU-CG-007/2023** e **IECM/ACU-CG-011/2023**, se hizo depender de la negativa del *Instituto Electoral* de reconocer a los *lugares de autoadscripción* como pueblos o barrios originarios para que fueran incluidos con tal calidad en el marco de los mecanismos de participación ciudadana en curso; sin embargo, al haber sido desvirtuado tal agravio, **lo procedentes es, también confirmar los citados acuerdos.**

d. Oportunidad e interculturalidad de las respuestas del Secretario Ejecutivo

A continuación se analizará el agravio hecho valer por las *partes actoras* —en los juicios TECDMX-JLDC-005/2023 y TECDMX-JLDC-006/2023— respecto a que la emisión de los oficios emitidos por el Secretario Ejecutivo del *IECM* no fueron oportunas ni culturalmente adecuadas.

Cabe recordar que el veintidós de noviembre, este Tribunal Electoral emitió sentencia en el diverso juicio de la ciudadanía **TECDMX-JLDC-024/2022**, en la cual, entre otras cuestiones, ordenó al Secretario Ejecutivo del *IECM* emitir una nueva respuesta respecto al reconocimiento de los lugares de autoadscripción como pueblos y barrios originarios que impugnaron aquel asunto [representados por el Frente por la

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac], lo cual debía acontecer a más tardar el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Con motivo de ello, mediante el oficio **IECM/SE/588/2022**, el *Instituto Electoral* requirió al Frente por la defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac, a efecto de que presentara información y documentación respecto a las comunidades que integraban el mismo.

En particular, se requirió informaran el vínculo de cada una de las personas peticionarias con los pueblos y/o barrios a los que se autoadscribían, es decir, si tenían el carácter autoridades representativas o tradicionales de sus respectivas comunidades, señalaran las unidades territoriales del Marco Geográfico que, en su caso, integraban sus comunidades y datos de identificación y localización de las personas peticionarias.

Lo anterior, a efecto de allegarse de elementos para emitir la respuesta que este *Tribunal Electoral* le ordenó en la sentencia antes referida.

En respuesta al requerimiento en comento, mediante escrito de cinco de diciembre, presentado ante el IECM el nueve siguiente, las *partes actoras* solicitaron al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral una **prórroga** de cinco días, con la finalidad de recabar y remitir la documentación solicitada.



Asimismo, solicitaron al Secretario Ejecutivo se propusiera una fecha y hora para tener un reunión de trabajo con las personas peticionarias a efecto de conocer la cartografía y determinar qué unidades territoriales correspondían a sus lugares de autoadscripción.

Posteriormente, mediante escrito de catorce de diciembre, presentado ante el *IECM* el diecinueve siguiente, las *partes actoras* solicitaron nuevamente al Secretario Ejecutivo del *Instituto Electoral*, entre otras cuestiones, se propusiera una fecha y hora para tener una reunión de trabajo con las personas peticionarias a efecto de conocer la cartografía y determinar qué unidades territoriales correspondían a sus lugares de autoadscripción.

Al respecto, el diez y once de enero de este año, el Secretario Ejecutivo emitió los oficios identificados como **IECM/SE/60/2023** e **IECM/SE/62/2023**, mediante los cuales dio contestación a las peticiones de referencia, en los siguientes términos:

- El requerimiento de información formulado mediante el oficio **IECM/SE/588/2022** se realizó a fin de dar cumplimiento a la sentencia **TECDMX-JLDC-024/2022**, con la finalidad de estar en posibilidad de dar una respuesta debidamente fundada y motivada al “Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la cuenca del Anáhuac” a más tardar el dieciséis de diciembre, plazo perentorio para cumplir con la ejecutoria referida.

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

- El dieciséis de diciembre, se emitió el diverso oficio **IECM/SE/744/2022** por el que se emitió la respuesta en comento.
- Respecto a la prórroga solicitada para entregar la información requerida, no resultaba procedente toda vez que dicha información se requería para emitir la nueva respuesta ordenada por el Tribunal Electoral en la sentencia **TECDMX-JLDC-024/2022**, la cual debía realizarse a más tardar el dieciséis de diciembre, por lo cual no resultaba procedente la ampliación solicitada.
- Por lo que hace a la reunión de trabajo para conocer la cartografía, se precisó que dicho material es de consulta pública y se encuentra disponible en la página institucional del *IECM*, para lo cual en el oficio se puso a disposición la liga electrónica en la cual podía ser consultada la información en comento.
- Finalmente, se precisó que si de la revisión de los datos proporcionados, aún considera necesaria una reunión, esta podrá programarse poniéndose en contacto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del *Instituto Electoral*.

Al respecto, se considera que la respuesta emitida por el Secretario Ejecutivo, efectivamente, no fue emitida con la

oportunidad debida, lo que **hace fundado el agravio planteado por las partes actoras, pero a la postre inoperante** como se expondrá a continuación:

En efecto, las *partes actoras* desde el nueve de diciembre solicitaron al *Instituto Electoral* les concediera una prórroga para dar contestación al requerimiento que les fue formulado mediante el oficio **IECM-SE-588/2022**.

Y es verdad que, mediante los oficios ahora impugnados —emitidos el diez y once de enero del año en curso—, el Secretario Ejecutivo informó a las *partes actoras* que no procedía la prórroga solicitada, toda vez que la información que les fue requerida serviría para dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral en el juicio TECDMX-JLDC-024/2022, en el cual se ordenó al *IECM* que emitiera una nueva respuesta a la parte actora de ese juicio a más tardar el dieciséis de diciembre.

Al respecto, se considera fundado lo alegado por las partes actoras ya que la autoridad responsable no atendió su petición en el plazo razonable, pues debió informarles la imposibilidad alegada de manera inmediata, tomando en consideración lo razonado por la propia autoridad en la respuesta otorgada.

Lo anterior, porque conforme al marco normativo del derecho de petición —que fue desarrollado en apartados precedentes— las autoridades están obligadas a dar contestación a las peticiones que les sean formuladas, **en breve término**, el cual debe

interpretarse a partir de la naturaleza de la propia petición, tomando en consideración las circunstancias particulares de ésta para dar una respuesta oportuna.

Lo anterior, conforme a lo sostenido en la jurisprudencia **32/2010** de rubro **“DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN “BREVE TÉRMINO” ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO”**.

Así, resulta evidente que el Secretario Ejecutivo incumplió con este aspecto, ya que fue **hasta el diez y once de enero** que **informó a las partes actoras** que no procedía su solicitud de prórroga —solicitada desde el nueve de diciembre—, ya que debía contarse con la información y documentación requerida a **más tardar el dieciséis de diciembre**.

Sin embargo, si bien resulta **fundada** la falta de oportunidad de la respuesta emitida por el Secretario Ejecutivo, a la postre **resulta inoperante**, ya que, tal y como fue explicado a lo largo de la presente sentencia, aun cuando se hubiese emitido en su oportunidad, ello no hubiera cambiado el resultado respecto a que el Instituto Electoral no puede dar reconocimiento a los lugares de autoadscripción como pueblos y barrios originarios previo a que la *SEPI* emita un pronunciamiento al respecto.

No obstante lo anterior, **se conmina al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral**, para que, en lo subsecuente, atienda los derechos de petición que le sean formulados cumpliendo con las formalidades que tal prerrogativa, es decir, atendiendo a la

naturaleza de lo pedido, deberá dar respuesta en el breve término que lo amerite.

Por otra parte, respecto a la falta de interculturalidad aludida por las *partes actoras*, respecto a la petición de concertar una reunión de trabajo, se considera que es **infundada**.

Ello, porque en efecto el derecho de petición, en el contexto del derecho al reconocimiento de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México — como es el caso— adquiere una dimensión específica, que debe ser adecuada al deber de protección de los derechos de tales comunidades.

En este contexto, se advierte que las *partes actoras* mediante los escritos presentados el nueve y diecinueve de diciembre solicitaron se concertaran reuniones de trabajo para conocer las unidades territoriales que integraban sus lugares de autoadscripción.

En atención a ello, en los oficios impugnados se precisó lo siguiente:

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Por cuanto hace a su solicitud, consistente en agendar una reunión de trabajo a fin de que las habitantes de los pueblos y barrios conozcan el marco geográfico que ocupan sus localidades, se precisa que, de acuerdo con los trabajos que se han realizado desde 2010, para delimitar colonias, pueblos y barrios, unidades habitacionales, residenciales, fraccionamientos, entre otras, para incluirlos en el marco geográfico de participación ciudadana, las comunidades solicitantes han conservado su territorio para procesos de participación ciudadana 2013, 2016 y 2019.

En tal virtud, se pone a su disposición, la cartografía del marco geográfico de participación ciudadana de esta Ciudad, a través de la siguiente liga electrónica:

<https://www.iecm.mx/www/scmgpc/#>

Lo anterior, a fin de que puedan consultar el mapeo de las localidades que sean de su interés.

No obstante, en caso de que con la información ahora proporcionada aún tenga dudas o desee manifestar planteamientos concretos, podrá acudir a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística, ubicada las oficinas centrales de este Instituto Electoral con domicilio en Huizaches No. 25, Col. Rancho los Colorines, Demarcación Tlalpan, C.P. 14386, en un horario de 9:00 a 17:00 horas o en su caso, al teléfono 54-83-38-00, exts. 5125 y 5122, para lo cual se le solicita realizar previa cita para prever el material que eventualmente se pudiera requerir.

Como se observa, la autoridad responsable explicó a las partes actoras en dónde podía ser consultada la información sobre la cual pretender realizar una reunión de trabajo; pero además, se les señaló que en caso de que eso no fuera suficiente, podían concertar una cita para acudir a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadísticas para exponer sus inquietudes.

Para ello, se citó el domicilio, horario de atención y dos números telefónicos para concertar la cita correspondiente.

En este contexto, se considera que la respuesta dada sí cumplió con la perspectiva intercultural a la que estaba obligado el *Instituto Electoral*; de ahí que resulte **infundada** la alegación



**TECDMX-JLDC-005/2023
Y ACUMULADOS**

realizada; en consecuencia, procede **confirmar** los oficios del Secretario Ejecutivo que fueron impugnados.

RESUELVE:

PRIMERO. Se ordena la acumulación de los juicios **TECDMX-JLDC-006/2023** y **TECDMX-JLDC-007/2023** al diverso **TECDMX-JLDC-005/2023**, en términos de lo precisado en el apartado correspondiente de esta sentencia.

SEGUNDO. Se **sobresee** la parte relativa al *Documentos Rector* de las demandas de los juicios **TECDMX-JLDC-005/2023**, **TECDMX-JLDC-006/2023** y **TECDMX-JLDC-007/2023**, conforme a lo precisado en el considerando **TERCERO** de esta sentencia.

TERCERO. Se **confirman** los oficios **IECM/SE/60/2023** e **IECM/SE/62/2023**, emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, conforme a la parte considerativa de la presente sentencia.

CUARTO. Se **confirma** el oficio **IECM/DD/28/011/2023** emitido por la Titular del Órgano Desconcentrado 28 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, conforme a la parte considerativa de la presente sentencia.

QUINTO. Se **confirman** los **Acuerdos IECM/ACU-CG-007/2023** y **IECM/ACU-CG-011/2023**, emitidos por el Consejo General del

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

Instituto Electoral de la Ciudad de México, conforme a la parte considerativa de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de Ley.

Publíquese en el sitio de internet de este Tribunal Electoral, www.tecdmx.org.mx, una vez que esta sentencia haya causado estado.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el voto concurrente que emite la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, al haber realizado los ajustes correspondientes a su proyecto. Voto que corre agregado a la presente Sentencia como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTES QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 9 Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-



**TECDMX-JLDC-005/2023
Y ACUMULADOS**

005/2023, TECDMX-JLDC-006/2023 Y TECDMX-JLDC-007/2023 ACUMULADOS.

Con el debido respeto para los integrantes de este órgano colegiado, si bien, acompaño la conclusión sustentada en el resolutivo **TERCERO** de la sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía citado al rubro, en el que se resolvió, esencialmente, **confirmar los oficios IECM/SE/60/2023 e IECM/SE/62/2023**, emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, considero que se debieron agregar otras razones para sustentar esa determinación.

Ello, porque desde mi perspectiva, en caso, que las partes actoras sean reconocidas como pueblos originarios, el Instituto Electoral debe hacer las modificaciones necesarias para adecuar **el marco geográfico electoral y garantizar la participación de éstas en los ejercicios de democracia participativa que correspondan.**

Por tanto, formulo el presente **VOTO CONCURRENTES**, para exponer las causas de mi disenso.

Caso concreto

Controversia del medio de impugnación

Del análisis a los agravios hechos valer por las partes actoras en sus escritos iniciales de demanda, en esencia se advierte que la controversia a resolver se centra en determinar si fue correcta la

determinación de *Instituto Electoral* relativa a que, para actualizar el *Marco Geográfico* respecto a los pueblos y barrios originarios, es necesaria la determinación correspondiente de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México.

Consideraciones de la sentencia

En la sentencia que, se consideran infundados los agravios relacionados con la falta del reconocimiento por parte del Instituto Electoral como Pueblo Originario de las partes actoras, así como su autoadscripción con ese carácter y la presunta vulneración al principio de progresividad, derivado de las respuestas que dio el Secretario Ejecutivo a las solicitudes efectuada por las partes actoras, ello en esencia por lo siguiente:

- Que en atención a lo resuelto por la *Sala Regional* en el asunto **SCM-JDC-338/2022 y acumulados**, actualmente existe un proceso coordinado entre la *SEPI* y el *Instituto* para estudiar cuáles son los pueblos y barrios originarios de esta Ciudad.
- Que la *SEPI* tiene la obligación de mantener actualizado el *Sistema de Registro* de tales pueblos y barrios, para que una vez que esa autoridad determine cuáles son los pueblos y barrios de la Ciudad, lo informe al *Instituto* para que este actualice su *Marco Geográfico*.

- Que no se pueden establecer dos procedimientos simultáneos para identificar cuáles son pueblos y barrios originarios —uno a cargo de la *SEPI* y otro por parte del *Instituto*— porque esto afectaría a los principios de certeza y de seguridad jurídica.
- Que no se ha vulnerado el derecho de la comunidad porque la *SEPI* no ha negado la calidad de pueblo; por el contrario, según lo narrado en el *oficio impugnado*, ante la solicitud de registro del *lugar de adscripción*, esa *Secretaría* se encuentra analizando la documentación presentada para, en su momento, determinar la procedencia de su registro.

Consideraciones de mi disenso

En efecto, de acuerdo con lo establecido por el TEPJF, para el reconocimiento de un pueblo originario, en primea instancia le corresponde a la Secretaría de Pueblos hacer ese reconocimiento y dar aviso al Instituto Electoral, que éste actualice el Marco Geográfico.

Ahora bien, no pasa inadvertido que, en su demanda, las partes actoras solicita expresamente a esta jurisdicción, la urgente resolución de la controversia planteada, con el propósito —se entiende— de lograr la participación de la comunidad a la que aquéllas se autoadscriben, en el proceso de participación ciudadana actualmente en desarrollo en la Ciudad de México.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo resuelto en la sentencia **SCM-JDC-388/2022 y acumulados**, la *Sala Regional* estableció que **el marco geográfico electoral puede modificarse siempre que exista la identificación de un pueblo originario.**

Ello, porque el *Sistema de Registro* no limita las facultades del *Instituto* en torno al *Marco Geográfico*, por el contrario, la información remitida por la *SEPI* al *IECM* debe ser considerada como un insumo principal.

Así, es importante destacar que, mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de treinta de diciembre de dos mil veintidós,²⁶ la *Secretaría de Pueblos* hizo del conocimiento el “Aviso por el que se hace de conocimiento que el *Sistema de Registro* es permanente para la Recepción, Sustanciación y Resolución de Solicitudes”.

De dicho aviso, se desprende que las personas interesadas en ser reconocidas como Pueblos o Barrios Originario de la Ciudad de México, podrán presentar su solicitud de registro en cualquier momento, lo que significa que una vez que se realice el trámite correspondiente y se tenga, en su caso, **la procedencia de una solicitud, el pueblo o barrio correspondiente tendría como consecuencia que pueda ejercer sus derechos políticos con**

²⁶ Consultable en la página https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a75b4ffa8300ceafb04563c0758e8e4.pdf



esa calidad, entre ellos, los relacionados con los procesos de participación ciudadana.

Es necesario recordar que el artículo 50, fracción XXIII, del *Código Local* prevé que le corresponde al Consejo General del *Instituto*, aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana.

Por su parte el artículo 62, fracción XI, del citado Código prevé que le corresponde a la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística Electoral proponer al Consejo General del *Instituto* el dictamen relativo al marco geográfico.

Así, en el artículo 22 de la *Ley de Pueblos* se prevé que los pueblos y barrios originarios participarán en el proceso participativo de acuerdo con el *Marco Geográfico de participación* aprobado por el *Instituto*.

Asimismo, establece que en la elaboración del *Marco Geográfico* el órgano electoral establecerá los criterios para que los derechos de los pueblos y barrios sean respetados.

Como se observa, el *Instituto* es el órgano encargado no sólo de aprobar el *Marco Geográfico*, sino también los criterios **para garantizar los derechos político-electorales de los pueblos y barrios originarios**. Es decir, el *Instituto Electoral* tiene la obligación de tutelar los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios en los procesos de participación ciudadana.

TECDMX-JLDC-005/2023 Y ACUMULADOS

En este sentido, es un hecho notorio que se encuentran en curso el mecanismo de participación ciudadana relativo a la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, apartado F, numeral 2 de la *Constitución Local*, en relación con el 120 de la *Ley de Participación* en los que se establece que en el año en que se realice la elección de autoridades constitucionales no podrá realizarse la elección de Comisiones de Participación Comunitaria ni la consulta en materia de Presupuesto Participativo.

Es decir, en la consulta de presupuesto participativo del año previo a la elección constitucional, se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior.

Situación que acontece en el presente año, toda vez que en esta anualidad —dos mil veintitrés— se realizará la Consulta de Presupuesto Participativo de los ejercicios 2023 y 2024, ya que el próximo año habrán elecciones constitucionales en esta Ciudad para elegir a las personas que ocuparán la titularidad de la Jefatura de Gobierno, dieciséis Alcaldías así como a las Diputaciones del Congreso local de esta Ciudad.

Bajo este contexto, no escapa de mi vista que la *Secretaría de Pueblos*, en principio, tenía hasta el treinta de diciembre del año dos mil veintidós, para emitir las resoluciones respecto de la



procedencia o no del reconocimiento de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México para que pudieran ser incluidos en el Marco Geográfico que rige en los mecanismos de participación ciudadana en curso.

Razón por la cual, desde mi perspectiva, si con posterioridad a esa fecha, se emitiera el reconocimiento de alguno de los *lugares de adscripción* de las *personas actoras* como pueblos o barrios originarios por parte de la *SEPI*, y aún no se hubiere llevado a cabo la Elección de COPACOS 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024 —cuya jornada electiva y consultiva presencial se llevará a cabo el próximo siete de mayo—, el *Instituto* debe realizar las adecuaciones que correspondan, para que sean incluidos en el Marco Geográfico en el actual ejercicio y se garantice su participación en el proceso de participación ciudadana con tal carácter. Precisando que, si existiere algún impedimento para ello, deberá informarlo a este Tribunal Electoral.

En caso de que, el reconocimiento se realizara una vez concluidos los mecanismos de participación ciudadana en curso —Elección de COPACOS 2023 y Consulta de presupuesto participativo 2023 y 2024—, tomando en consideración que, la consulta de presupuesto participativo es anual, —lo que evidencia que también habrá consulta en el dos mil veinticinco— el Instituto debe realizar los ajustes correspondientes para que se incluya a los lugares de adscripción que la *SEPI* llegara a

reconocer como pueblos o barrios, en el Marco Geográfico que regirá para ese ejercicio o posteriores.

Bajo cualquier supuesto, corresponderá al *Instituto Electoral* establecer las medidas pertinentes para definir cómo proceder respecto a las COPACOS que se encuentren en funcionamiento en los *lugares de autoadscripción*, a fin de que la existencia de tales órganos ciudadanos, no implique un obstáculo al derecho a la participación ciudadana de las comunidades, una vez reconocidas como pueblos originarios.

Así, con la finalidad de garantizar los derechos y participación de los Pueblos que, en su caso, sean reconocidos por la *SEPI*, en cuanto el *Instituto Electoral* tenga conocimiento de tal reconocimiento, debe realizar las gestiones necesarias para garantizar su participación en la consulta de presupuesto participativo que corresponda o en la respectiva elección de COPACOS.

Ello tomando en cuenta que el presente asunto, se debe analizar desde una perspectiva intercultural de conformidad con lo establecido en el artículo 2, de la Constitución, que obliga al Estado Mexicano a adoptar medidas especiales para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a los pueblos y comunidades indígenas y similares, sin restricciones, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones.



**TECDMX-JLDC-005/2023
Y ACUMULADOS**

Lo anterior resulta fundamental al momento de juzgar con una perspectiva intercultural, pues la comprensión de este derecho implica el reconocimiento de sistemas jurídicos diversos, con instituciones que le son propias, con el fin de evitar la imposición de instituciones creadas bajo la lógica del sistema legislado formalmente.²⁷

**CONCLUYE VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA LA
MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO RAMÍREZ,
RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL DEL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA TECDMX-JLDC-
005/2023, TECDMX-JLDC-006/2023 Y TECDMX-JLDC-
007/2023 ACUMULADOS.**

**ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE INTERINO**

²⁷ Lo anterior con fundamento en lo previsto en las Jurisprudencias de rubros: 19/2014, de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPOENEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO”, 37/2016 “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO” y 19/2018, “JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL” así como las tesis 1a. CCXCIX/2018 (10a.) de rubro “INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL. ALCANCE DE LAS PROTECCIONES DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL.” y 1a. CCXI/2009 de rubro “PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. EN LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE QUE SEAN PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR EN CUENTA TANTO LAS NORMAS DE FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES”

**TECDMX-JLDC-005/2023 Y
ACUMULADOS**

**MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ
CAMARENA
MAGISTRADA**

**MARTHA LETICIA MERCADO
RAMÍREZ
MAGISTRADA**

**JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN
MAGISTRADO**

**PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL**

“Este documento es una versión pública de su original, elaborada el día dieciséis de febrero 20, motivo por el cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los artículos 100, 106, fracción III, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, fracción III, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 62 fracciones de la I a XI, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; y numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y sexagésimo primero, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, colocándose en la palabra testada un cintillo negro.”